

incorporó al proceso mediante las declaraciones de los policías que lo llevaron a cabo, durante el juicio oral, con todas las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de defensa del demandante de amparo [ ]. 10. Se vulneró el derecho a un proceso con todas las garantías del recurrente, por haber sido incorporadas y ponderadas las comunicaciones telefónicas sin respeto de las más mínimas exigencias inherentes a las garantías de defensa y contradicción [ ]. 11. La Audiencia Provincial no sustentó la condena exclusivamente en las intervenciones telefónicas, sino que, como deriva de la lectura del acta de la vista oral y se reflejó mínimamente en dicha Sentencia, la decisión judicial se basó también y fundamentalmente en las declaraciones de los distintos policías que intervinieron durante todo el proceso de investigación, detención de los acusados y registros [ ]. 12. Doctrina constitucional sobre pruebas independientes de otras pruebas ilícitas (SSTC /1995, /1998 y /1999) [ ]. 13. En el presente caso la claridad meridiana de los datos aportados al presente proceso, y en especial los que se desprenden de las Sentencias recurridas, permite a este Tribunal ejercer directamente su control de constitucionalidad sin necesidad de reenvío [ ]. 14. El Juzgado de Instrucción que emitió el Auto de registro del domicilio del recurrente es un órgano jurisdiccional dotado de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación y, en ningún caso, su régimen orgánico y procesal permite calificarlo de órgano especial o excepcional. Por tanto, no se vulneró el derecho al Juez legal [ ]. 15. En el curso de las cuarenta y tres horas que precedieron a la diligencia de instrucción de los derechos al detenido no se produjo ninguna declaración del mismo, de forma que no se alega ni se observa en qué medida pudo afectar a sus posibilidades de defensa el, ciertamente, dilatado plazo en el que el recurrente estuvo en las dependencias policiales sin que la fuerza policial cumpliera con los deberes constitucionalmente asignados [ ]. 16. Los órganos judiciales no repararon las lesiones de los derechos fundamentales que se estimaban lesionados, solo en lo que se refiere al secreto de las comunicaciones y al derecho a un proceso con todas las garantías [ ].

4. A la autorización y práctica de la intervención telefónica de la línea conectada al domicilio del recurrente, así como a la incorporación al proceso del resultado de la misma, atribuye el demandante de amparo un buen número de irregularidades que, en su opinión, provocaron directamente no sólo la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones, sino también la del derecho a un proceso con todas las garantías e, indirectamente, la del derecho a la presunción de inocencia al haberse utilizado para sustentar su condena las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante la intervención telefónica. El análisis de estas irregularidades desde la perspectiva de los derechos invocados requiere un breve recordatorio de la jurisprudencia constitucional con el objeto de diferenciar las consecuencias que las mismas pueden tener en los derechos constitucionales. A tal efecto, ha de ponerse

**SIN TEXTO**



•

•

•

•

en cuestión la afirmación del recurrente de que las irregularidades cometidas en la intervención telefónica generaron no sólo la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, sino también de forma refleja y automática la del derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. No es correcto sostener que toda prueba obtenida mediante la intervención telefónica queda sometida a la prohibición constitucional de valoración que a toda prueba obtenida con vulneración de derechos constitucionales le atañe. En efecto, aunque del análisis de la intervención telefónica realizada resultara la confirmación de la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones, ello no supondría de forma paralela y automática la lesión de la prohibición de valoración de todas las pruebas derivadas de las intervenciones. Pues si bien es cierto que desde la STC 19/1984 se ha venido afirmando por este Tribunal la prohibición de valorar las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (además, SSTC 19/1985, 19/1986, 19/1991), no sólo en lo que atañe a los resultados directos de la intervención, sino a «cualquier otra prueba derivada de la observación telefónica, siempre que exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios» (STC 19/1996, fundamento jurídico 1), aunque derive indirectamente de aquélla (SSTC 19/1994, fundamento jurídico 1; 19/1995, fundamento jurídico 1; 19/1995, fundamento jurídico 1 y 2; 19/1996, fundamento jurídico 1), no es menos cierto que este Tribunal ha profundizado recientemente en las excepciones, ya admitidas por la anterior doctrina. Así, de conformidad con la más reciente doctrina constitucional, es lícita la valoración de pruebas que, aunque se encuentren conectadas desde una perspectiva natural con «el hecho constitutivo de la vulneración del derecho fundamental por derivar del conocimiento adquirido a partir del mismo», puedan considerarse jurídicamente independientes (SSTC 19/1995, fundamento jurídico 1; 19/1996, fundamento jurídico 1 y 2; 19/1998, fundamento jurídico 1). En el desarrollo de estas excepciones, ha precisado este Tribunal las razones que avalan la independencia jurídica de unas pruebas respecto de otras. La razón fundamental reside en que las pruebas derivadas son desde su consideración intrínseca constitucionalmente legítimas, pues ellas no se han obtenido mediante la vulneración de ningún derecho fundamental; por lo tanto, no puede entenderse que su incorporación al proceso implique lesión del derecho a un proceso con todas las garantías (STC 19/1998, fundamento jurídico 1). En efecto, en la medida en que la información obtenida a través de las intervenciones telefónicas puede ser incorporada al proceso como medio autónomo de prueba, bien por sí mismo -audición de las cintas-, bien a través de su transcripción mecanográfica -como documentación de un acto sumarial previo-, bien a través de las declaraciones testificales de los funcionarios policiales que escucharon las conversaciones intervenidas (SSTC 19/1998, fundamento jurídico 1., y 19/1998, fundamento jurídico 1.), para que las pruebas derivadas puedan quedar afectadas por la prohibición constitucional de valoración de pruebas ilícitas es preciso que la

**SIN TEXTO**



ilegitimidad de las pruebas originales se transmita a las derivadas (SSTC /1998, fundamento jurídico ., y /1998, fundamento jurídico .). Esta transmisión se produce en virtud de la existencia de una conexión de antijuridicidad cuya presencia resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, como desde una perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho (SSTC /1998, fundamento jurídico ; /1998, fundamento jurídico ., y /1999, fundamento jurídico ). De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad (SSTC /1998, /1998, /1998 y /1999).

En consecuencia, procede examinar, en primer término, si se produjeron las irregularidades aducidas por el recurrente en el desarrollo de las intervenciones telefónicas, para, en segundo lugar, y en caso de afirmarse su existencia, analizar si la ilicitud de las pruebas directamente obtenidas mediante ellas se transmite a las que derivan del conocimiento adquirido a través de ellas, de forma tal que pueda afirmarse igualmente la prohibición de su valoración en el proceso. 5. La

vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones se imputa al Auto de autorización judicial y a los de prórroga de la intervención. Así, respecto del primero, se alega la falta de determinación del alcance objetivo de la intervención -personas y delito investigado-, la ausencia de los indicios en que se fundamenta la existencia del delito y de la ponderación de los intereses en conflicto, derivándose de todo ello la falta de motivación exigible al mismo en cuanto exteriorización del enjuiciamiento de la proporcionalidad de la medida restrictiva del derecho fundamental. En lo que al primer Auto de prórroga concierne, se afirma, de nuevo, la falta de indicios necesarios, y consiguientemente de ponderación, para continuar la medida, pues, de un lado, las irregularidades en el control judicial de la ejecución -no aportar cintas originales, falta de adveración de su contenido por el Secretario judicial-, avalan la ausencia de control y conocimiento judicial de su resultado, y, de otro, la propia solicitud policial afirmaba la falta de materialización de las sospechas hasta el momento de la solicitud de prórroga. Pues bien, ha de darse la razón al recurrente en cuanto a que alguna de las irregularidades aducidas, caso de haberse producido, generarían la lesión del derecho al secreto de las comunicaciones. De la síntesis de la jurisprudencia constitucional (SSTC /1984, /1994, /1995, /1995, /1996, /1996, /1998, /1998, /1998 y /1999) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -casos (Sentencia de 6 de septiembre de 1978), (Sentencia de 2 de agosto de 1984), (Sentencia de 24 de abril de 1990), (Sentencia de 25 de marzo de 1998), (Sentencia de 25 de marzo de 1998) y (Sentencia de 30 de julio de

POWER  
CUTTER  
COOK

ATG

1998)-, deriva que una medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede entenderse constitucionalmente legítima desde la perspectiva de este derecho fundamental si, en primer lugar, está legalmente prevista con suficiente precisión -principio de legalidad formal y material (STC 1999, fundamento jurídico ); si, en segundo lugar, se autoriza por autoridad judicial en el marco de un proceso (STC 1999, fundamento jurídico ), y, en tercer lugar, si se realiza con estricta observancia del principio de proporcionalidad (STC 1999, fundamento jurídico ); es decir, si la medida se autoriza por ser necesaria para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, como -entre otros- para la defensa del orden y prevención de delitos calificables de infracciones punibles graves, y es idónea e imprescindible para la investigación de los mismos (ATC 1990; SSTC 1994, fundamento jurídico ; 1995, fundamento jurídico ; 1996, fundamento jurídico ; 1996, fundamentos jurídicos . y ., y 1997, fundamento jurídico ; Sentencias del T.E.D.H., casos , y ) y existen indicios sobre el hecho constitutivo de delito y sobre la conexión con el mismo de las personas investigadas. No se requiere que la resolución judicial explicita el juicio de proporcionalidad pero sí que aporte los elementos necesarios para que ese juicio pueda llevarse a cabo posteriormente atendiendo a los fines legítimos y a las circunstancias concretas concurrentes en cada momento (SSTC 1994, 1995, 1995, 1996 y 1996). Concretamente, afecta a la legitimidad de la decisión la falta de necesidad estricta de la medida; ésta puede ser constitucionalmente ilegítima, bien porque los conocimientos que pueden ser obtenidos carecen de relevancia respecto de la investigación del hecho delictivo o respecto de la conexión de las personas investigadas, o bien porque pudieran obtenerse a través de otras medidas menos gravosas de los derechos fundamentales en litigio, lo que conllevaría la afirmación de su cualidad de prescindible (SSTC 1996, fundamento jurídico , y 1999, fundamentos jurídicos y ). Incide también en la legitimidad de la intervención, la falta de expresión o exteriorización tanto de la existencia de los presupuestos materiales de la intervención -investigación, delito grave, conexión de las personas con los hechos- como de la necesidad de la medida -razones y finalidad perseguida- (STC 1996, fundamento jurídico ); y todo ello es exigible, asimismo, respecto de las decisiones de mantenimiento de la medida, en cuyo caso, además, deben ponderarse las concretas circunstancias concurrentes en cada momento y el conocimiento adquirido a través de la ejecución de las medidas inicialmente previstas (SSTC 1995, fundamento jurídico , y 1999, fundamento jurídico ). La ejecución de la intervención telefónica debe atenerse a los estrictos términos de la autorización tanto en cuanto a los límites materiales o temporales de la misma como a las condiciones de su autorización (SSTC 1994, fundamento jurídico ; 1995, fundamento jurídico ; 1996, fundamento jurídico , y 1998, fundamento jurídico . ) y, finalmente, debe llevarse a cabo

**SIN TEATO**





bajo control judicial (por todas, SSTC /1996, fundamento jurídico .; /1998, fundamento jurídico ., y /1998, fundamento jurídico .). 6. Aplicando esta razón de decidir al caso enjuiciado no pueden compartirse las pretensiones del recurrente de que se hayan producido todas las irregularidades que se aducen, ni de que todas ellas impliquen vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Procede, en primer término, recordar que, aun utilizando la no recomendable forma del impreso, una resolución puede estar motivada si, integrada incluso con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios a efectos de considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva (STC 1997, fundamento jurídico 4). Para poder precisar si en este caso la resolución está suficientemente motivada resulta conveniente transcribir tanto la solicitud policial como el Auto de 14 de noviembre: a) El Auto de 14 de noviembre tiene el siguiente tenor literal: Hechos: Unico.-Que en la fecha arriba indicada se presentó en este Juzgado, en función de Guardia, oficio de la Comisaría de Fuengirola, por el cual se solicitaba la intervención del número de teléfono que constaba en el mismo, alegando los motivos que avalan dicha petición basados en la investigación de unos hechos supuestamente delictivos. Fundamentos jurídicos: Unico.-Que el art. 18.3 de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones telefónicas salvo que por resolución judicial se disponga lo contrario, siendo así que en el presente supuesto, existiendo sospechas fundadas de la comisión de un posible delito, resulta procedente para el esclarecimiento del mismo, así como la identificación de las personas responsables y demás circunstancias de interés, adoptar tal medida, en aplicación analógica de los artículos 572, 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Parte Dispositiva: Intervéngase el teléfono número a nombre de durante el plazo de un mes, dándose cuenta del resultado de la escucha; líbrese a tal efecto oficio a la Delegación de Telefónica de esta ciudad, haciéndole saber la obligación de informar a este Juzgado de cuantas llamadas maliciosas efectuaren durante dicho plazo al mismo...». b) La solicitud policial de igual fecha dice: «Por gestiones que vienen realizándose en colaboración con el Grupo de Delincuencia Internacional de la Brigada de Policía Judicial de Málaga, se ha teniendo (sic) conocimiento que el teléfono viene siendo utilizado por un individuo apodado ', de nacionalidad miembro de un grupo internacional dedicado al tráfico de estupefacientes, concretamente ', y a través del mismo contacta con otros miembros del grupo. Dicho teléfono figura a nombre de nacida el con domicilio en esta localidad, . Por todo lo anterior, se solicita de , si a bien lo tiene, el oportuno mandamiento para intervenir dicho teléfono, cuya observación se efectuará en esta Dependencia, y de cuyo resultado se dará cuenta a su Autoridad.» 7. Pues bien, de la lectura

CLIN TEXTO

CLIN TEXTO

conjunta del Auto de 14 de noviembre y la solicitud policial a la que se remite, resulta, en primer término, que la solicitud policial no ofrece dudas de que la persona investigada como usuario del teléfono es la persona apodada « ». Por tanto, ha de entenderse que expresa el alcance subjetivo de la medida, cuya relevancia constitucional ha sido declarada por este Tribunal (SSTC /1996, fundamento jurídico y /1996 fundamento jurídico ). En segundo lugar, tampoco puede cuestionarse la exteriorización del delito investigado, pues la solicitud policial se refiere al tráfico de estupefacientes y, en concreto, a la existencia de un grupo internacional dedicado al mismo, del que sería miembro el investigado. En relación con ello, hay que afirmar la legitimidad constitucional del fin perseguido: Investigación de un delito de tráfico de drogas cuyas características hemos reconocido que pueden justificar este tipo de medidas [SSTC /1989, fundamento jurídico ; /1994 fundamento jurídico ; /1996, fundamento jurídico ), y 1999, fundamento jurídico ]. En tercer lugar, se determina la medida policial que llevará a cabo la misma, el Grupo Local de la Policía Judicial de la Comisaría de Fuengirola, el alcance temporal de la medida, un mes, y la obligación de informar al Juzgado en dicho plazo. Finalmente se afirma la idoneidad de la medida de intervención telefónica para obtener información sobre los contactos con otros miembros del grupo.

15. Con todo, esta constatación no conduce automáticamente a la conclusión de que efectivamente la Sentencia recurrida ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, ya que la Audiencia Provincial no sustentó la condena exclusivamente en las intervenciones telefónicas, sino que, como deriva de la lectura del acta de la vista oral y se reflejó mínimamente en dicha Sentencia, la decisión judicial se basó también y fundamentalmente en las declaraciones de los distintos policías que intervinieron durante todo el proceso de investigación, detención de los acusados y registros. La existencia de otras pruebas constitucionalmente legítimas junto a las relativas a las escuchas telefónicas, obliga, de acuerdo con nuestra jurisprudencia (SSTC /1998, /1998, /1998, /1999, /1999 y /1999), a posponer la decisión acerca de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia al examen de dos extremos interrelacionados: En primer lugar, debe indagarse si estas pruebas resultan o no jurídicamente independientes de las pruebas aquejadas de ilicitud constitucional y, en el supuesto que así sea, deberá determinarse si, excluidas las intervenciones telefónicas, del resto de las pruebas podían inferirse de forma no arbitraria y suficientemente sólida todos los hechos que, declarados probados, pueden sustentar la condena del recurrente. Para determinar si la prohibición de valoración de las escuchas telefónicas se extiende también a las demás pruebas «habrá de precisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es, habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita

**SIN TEXTO**



afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segundas (conexión de antijuridicidad)». Como se acaba de recordar en el fundamento jurídico , esta conexión resulta del examen conjunto del acto lesivo del derecho y su resultado, tanto desde una perspectiva interna, es decir, en atención a la índole y características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, como desde una perspectiva externa, a saber, de las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho (SSTC /1998, fundamento jurídico ; /1998, fundamento jurídico , y /1999, fundamento jurídico ). De manera que es posible que la prohibición de valoración de las pruebas originales no afecte a las derivadas, si entre ambas, en primer lugar, no existe relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad (SSTC /1998, /1998, /1998 y /1999). En el supuesto de que esta conexión de antijuridicidad no existiese, para poder valorar la prueba reflejada debería indagarse todavía si concurre alguno de los hechos cuya erradicación resulta una necesidad esencial para la tutela del derecho al secreto de las comunicaciones, como puede ser la intencionalidad o la negligencia grave en la actuación pública relativa a la intervención telefónica ( STC /1981). Con todo, como hemos reiterado en las citadas Sentencias, la determinación de la existencia del nexo de antijuridicidad entre la prueba originaria y la derivada constituye «un juicio de experiencia acerca del grado de conexión que determina la pertinencia o impertinencia de la prueba cuestionada... que, en principio, corresponde a los Jueces y Tribunales ordinarios [en tanto que] el examen de este Tribunal ha de ceñirse a la comprobación de la razonabilidad del mismo» (SSTC /1989, fundamento jurídico ; /1999, fundamento jurídico , y /1999, fundamento jurídico ). Lo mismo cabe decir respecto de la apreciación acerca de si el acervo probatorio restante, tras la depuración de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, es suficiente para sustentar la condena: Esta es también una tarea que corresponde en primer lugar a los Jueces y Tribunales ordinarios. Por ello, en la doctrina citada, cuando los Tribunales ordinarios no han declarado la inexistencia de conexión de antijuridicidad (SSTC /1999 y /1999, por contraste con la /1998) o cuando han efectuado una valoración conjunta de toda la prueba (STC /1999), este Tribunal se ha limitado a declarar la vulneración del derecho sustantivo al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio y a anular las Sentencias condenatorias retrotrayendo las actuaciones para que fueran los órganos judiciales los que resolvieran acerca de la existencia o no de conexión de antijuridicidad entre las pruebas rechazadas y las restantes y sobre la suficiencia de estas últimas para sustentar la condena. Como se declaró en la STC /1999, «establecido el canon en virtud del cual los Tribunales competentes han de determinar si las pruebas derivadas son o no constitucionalmente legítimas termina nuestra jurisdicción, sin que podamos determinar ahora si se ha vulnerado o no la presunción de inocencia, cosa que

INTERNATIONAL

14

ESTADO  
LIBRE  
DE  
COMERCIO

todavía corresponde declarar a los Tribunales ordinarios». 16. Sin embargo, en el presente caso la claridad meridiana de los datos aportados al presente proceso y en especial los que se desprenden de las Sentencias recurridas permite a este Tribunal ejercer directamente su control de constitucionalidad sin necesidad de reenvío. En efecto, no cabe duda de que, respecto de la conexión natural, entre la intervención telefónica y los sucesos posteriores a aquélla, el nexo reside en el hecho de que a raíz de los datos que ésta aporta, la fuerza policial decide genéricamente el seguimiento y vigilancia de don [redacted] y del coimputado don [redacted], siendo este seguimiento el que permitió observar a los policías el incidente del día 29 de enero, motivo directo de su detención. De forma que, dadas las circunstancias del caso, la observación y seguimiento de que el recurrente era objeto, en virtud de la irrelevancia de los datos obtenidos a través de la intervención telefónica, no puede entenderse irrazonable la conclusión de que el conocimiento derivado de la intervención telefónica no fue indispensable ni determinante por sí solo de la ocupación de la droga. En un supuesto que guarda una evidente semejanza con el aquí enjuiciado, este Tribunal admitió la razonabilidad del juicio de experiencia que llevó al Tribunal Supremo a admitir la pertinencia de la referida prueba derivada (STC 1998). De otra parte, también resulta palmario que tampoco las necesidades de tutela del derecho al secreto de las comunicaciones obligan a declarar la prohibición de valoración de las pruebas reflejas. Pues, de un lado, ha de excluirse tanto la intencionalidad como la negligencia grave en la actuación pública en la intervención telefónica, por lo que debemos situarnos en el ámbito del error, «frente al que las necesidades de disuasión no pueden reputarse indispensables desde la perspectiva de la tutela del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones». Y, de otro, tampoco la entidad objetiva de la vulneración cometida «hace pensar que la exclusión del conocimiento obtenido mediante la intervención de las comunicaciones resulte necesaria para la efectividad del derecho», pues se trata de una injerencia llevada a cabo con una autorización judicial insuficientemente motivada, pero no carente de todo punto de ella. Por tanto, al igual que se declaró en la STC 1998 (fundamento jurídico ) «en este caso, la necesidad de tutela inherente al derecho al secreto de las comunicaciones quedó satisfecha con la prohibición de valoración de la prueba directamente constitutiva de la lesión». Finalmente, debe advertirse que, como queda dicho, de la simple lectura de las Sentencias recurridas se deduce sin dificultad que, dada la declarada irrelevancia de los datos obtenidos mediante las intervenciones telefónicas, la condena en realidad se sustentó exclusivamente en los resultados obtenidos de las declaraciones de los policías que efectuaron el seguimiento de los encausados y los registros domiciliarios, y esta prueba, que sustenta la condena, no incurre, como también se ha dicho, en ninguna prohibición de valoración desde la perspectiva constitucional. Por consiguiente, desde nuestro limitado control constitucional puede admitirse que existió prueba de cargo,



SECRETARIA DE JUSTICIA



legítimamente obtenida, de la que deriva razonablemente la existencia de los hechos probados y la condena del demandante de amparo por el tipo agravado de tráfico de estupefacientes. 17. La demanda de amparo pretende, también, que se habría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto los órganos judiciales no repararon las lesiones de los derechos fundamentales que se estimaban lesionados. Esta pretensión sólo puede ser estimada en lo que se refiere a la no reparación por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y del derecho a un proceso con todas las garantías, generadas ambas por las irregularidades cometidas en el curso de la intervención telefónica realizada.

**FALLO** En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA Ha decidido

1 Declarar vulnerados los derechos al secreto de las comunicaciones, al proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva.

2 Desestimar la demanda de amparo en todo lo demás. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

## **EN COLOMBIA**

### **DERECHO COMPARADO-Prueba ilícita y nulidad del proceso judicial**

**JURISPRUDENCIA-Prueba ilícita no contamina el resto del material probatorio**  
**CODIGO PENAL-Exclusión de la prueba/CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-**  
 Prueba ilícita no puede ser legítimamente valorada

Referencia: solicitud de nulidad de la Sentencia T- de 2007, proferida por la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional

Expediente: T-

Peticionario:

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil siete (2007)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere este auto con fundamento en los siguientes:

**SIN TEXTO**



-Independencia de los conceptos de invalidez de la prueba inconstitucional y validez del proceso judicial en el que se aduce

Por tener indudable relevancia con el asunto planteado por el impugnante, esta Sala considera pertinente hacer unas breves referencias doctrinales acerca de si es necesario que, por aparecer una prueba vulneradora de derechos fundamentales en un proceso judicial, el proceso está destinado a anularse.

El interrogante anterior ha sido tradicionalmente resuelto a partir de un símil de la jurisprudencia norteamericana que alude al **fruto del árbol envenenado** - "fruits of the poisonous tree"- . Esta tesis propugna la anulación de todas las pruebas del acervo procesal como consecuencia de la presencia de una prueba ilegítima en el proceso. En su concepción más radical, todo el contenido probatorio del proceso estaría viciado de nulidad como consecuencia de la existencia de una prueba ilegal o inconstitucional.

No obstante, la tesis del fruto del árbol envenenado no es de aceptación jurisprudencial, por lo menos en su presentación más extrema. En primer lugar, la propia doctrina norteamericana ha venido moderándose como consecuencia de la admisión de excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, tales como el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable.

**La jurisprudencia nacional, por su parte, ha dicho que la presencia de una prueba ilícita en el proceso no contamina inexorablemente el resto del material probatorio y tampoco necesariamente todas las pruebas que de alguna u otra forma tengan nexo con aquella.**

En la pluricitada Sentencia - de 2002 la Corte sostuvo que la corrupción de las pruebas procesales por causa de una prueba ilícita no es automática, por lo que es necesario revisar la dependencia de las mismas en cada caso concreto. Sobre dicho particular aseguró:

"Se apartan así el texto del artículo 29 y la jurisprudencia constitucional colombiana de lo que podría llamarse la doctrina de la manzana contaminada en el cesto de frutas, según la cual, bastaría con que una de las pruebas que hacen parte del acervo probatorio esté viciada, para que dicha contaminación se extienda al resto de las pruebas, sin importar cual sea su relación con la prueba cuestionada. Para la Corte la conclusión de que la contaminación de una prueba no se comunica necesaria y automáticamente al conjunto del acervo probatorio y, por ende, a todo el proceso se sigue del texto, de la jurisprudencia, de la historia de la norma, así como

**SIN TEXTO**



de una lectura teleológica de la propia Carta Política". (Sentencia de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)

Al analizar el criterio de dependencia de la prueba derivada, la Corte sostuvo que la ilicitud sólo se transmite a la prueba que depende exclusiva, directa, inmediata y próximamente de la fuente ilícita. Sobre el punto, la Corte agregó:

"Tal y como se ha expuesto atrás (ver 4.2.3) a la luz del derecho comparado, son múltiples las teorías sobre los efectos y alcances de la doctrina de la prueba derivada de una prueba viciada. Entre los criterios utilizados para distinguir cuándo una prueba se deriva de una primaria viciada es posible distinguir criterios formales –si el vínculo es directo o indirecto, mediano o inmediato, próximo o lejano–, criterios de gradualidad –si el vínculo es tenue, de mediano impacto o manifiesto–, criterios de conducta –si se explota intencionalmente la prueba primaria viciada o si la llamada prueba derivada tiene origen en una fuente independiente– o criterios materiales –si el vínculo es necesario y exclusivo o si existe una decisión autónoma o una fuente independiente que rompe, disipa o atenúa el nexo puesto que la prueba supuestamente derivada proviene de una fuente independiente y diversa. **Así, son claramente pruebas derivadas ilícitas las que provienen de manera exclusiva, directa, inmediata y próxima de la fuente ilícita. En cambio, no lo son las que provienen de una fuente separada, independiente y autónoma o cuyo vínculo con la prueba primaria se encuentra muy atenuado en razón de los criterios anteriormente mencionados.** Pasa la Corte a evaluar si, en el presente caso, por la aplicación del conjunto de los anteriores criterios, las decisiones judiciales cuestionadas incluyeron pruebas derivadas que deberían haber sido excluidas por estar afectadas igualmente del vicio original" (Sentencia de de 2002 M.P. (subrayas fuera del original).

Adicionalmente, el legislador colombiano acogió, en el nuevo Código Penal, las excepciones a la regla de exclusión de las pruebas derivadas, al advertir en la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal de tendencia acusatoria acepta, que una prueba derivada de una prueba ilícita no puede ser legítimamente valorada (art. 23 Ley 906 de 2004), a menos que respecto de ella ofrezca un vínculo atenuado, provenga de fuente independiente o su descubrimiento resulte inevitable, entre los demás casos señalados por el legislador (art. 455 Ley 906 de 2004).

En relación con dicha disposición, en providencia de 2005, la Corte señaló:

"En tal sentido, el artículo 455 del nuevo C.P.P. establece determinados criterios para analizar si una prueba realmente deriva o no de otra, tales como el vínculo

**SIN  
TEXT O**

EDBEN HODG  
SUPREMA CORTI  
SECRETARI  
P

atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable “y las demás que establezca la ley”, para efectos de establecer si la prueba es nula de pleno derecho, y por lo tanto deberá excluirse de la actuación. Para tales efectos, el juez deberá tener en cuenta las reglas de la experiencia y de la sana crítica, dado que será preciso examinar la presencia o no de un nexo causal entre una prueba y otra, al igual que entrar a ponderar entre diversos factores, tales como los derechos fundamentales del procesado, aquellos de las víctimas y terceros, al igual que el cumplimiento estatal de investigar y sancionar efectivamente el delito.

“Al respecto de los criterios determinados por el legislador en el artículo acusado, en el derecho comparado han conocido tales criterios, en el sentido de que por **vínculo atenuado** se ha entendido que si el nexo existente entre la prueba ilícita y la derivada es tenue, entonces la segunda es admisible atendiendo al principio de la buena fe, como quiera que el vínculo entre ambas pruebas resulta ser tan tenue que casi se diluye el nexo de causalidad; ( iv ) la **fuentes independiente**, según el cual si determinada evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida, no se aplica la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso; y ( v ) el **descubrimiento inevitable**, consistente en que la prueba derivada es admisible si el órgano de acusación logra demostrar que aquélla habría sido de todas formas obtenidas por un medio lícito.” (Sentencia de 2005 M.P.

Del análisis doctrinario jurisprudencial precedente se evidencia que la posición de la Sala en la Sentencia de 2007 adoptó la posición legítima derivada de los fallos citados, en los que se admite que un proceso judicial no está condenado a desaparecer por la sola existencia de una prueba ilícita detectada en sus diligencias. En estas condiciones, no constituye vulneración de la jurisprudencia precedente el hecho de que la Sala Quinta de Revisión haya dejado en pie el proceso, pese a haber detectado la vulneración del derecho fundamental a la intimidad en la prueba videograbada. Esta decisión tampoco es arbitraria si se la mira desde la perspectiva de las razones que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a condenar al tutelante, pues la Sala Quinta de Revisión sustentó de manera completa, cómo era factible – haciendo abstracción del contenido de la prueba ilícita- llegar a la conclusión independiente sobre la responsabilidad penal del imputado, a partir de las demás pruebas aportadas al proceso.

En las condiciones anotadas, el primer reproche acerca de la nulidad de la Sentencia de 2007 se encuentra indebidamente sustentado e indebidamente catalogado: lo que el impugnante quiere hacer parecer como un cambio en la jurisprudencia no es más que una inconformidad relativa al análisis concreto que la Sala Quinta hizo, respecto de un debate probatorio específico, a la luz de una jurisprudencia unívoca y compartida por todos.

**SIN TEXTO**





Es más, en su escrito de impugnación, el recurrente no explica cuál es el criterio general adoptado por la Sala de Revisión que en materia de prueba ilícita es incompatible con una corriente jurisprudencial previamente fijada por la Corte.

-No hay cambio de jurisprudencia. Indebida formulación del cargo.

La jurisprudencia constitucional sobre procedencia de nulidad por cambio de jurisprudencia de una sala de revisión exige que la sala enjuiciada en verdad haya adoptado una posición contraria a la uniformemente admitida por la Corte. El citado Auto de 2006 impone que la sentencia "objeto de solicitud de nulidad debe en forma expresa acoger una regla de decisión contraria a la contenida en la jurisprudencia en vigor aplicable a la materia correspondiente", a lo cual agrega que no cabe reprochar la sentencia de tutela cuando la petición de nulidad consista en "(i) diferencias esenciales o accidentales entre casos aparentemente iguales".

El primer motivo de inconformidad del aquí impugnante no se funda en un desconocimiento de la jurisprudencia precedente. Se basa en el hecho de que, a su juicio, la Sala Quinta no admitió en su análisis correspondiente que la prueba ilícita aportada al expediente era suficiente para anular el proceso penal. No obstante, este reproche no tiene nada que ver con la posición jurisprudencial de la Sala, sino con la aplicación concreta de las tesis de la jurisprudencia, en el análisis real de los detalles procesales de las diligencias adelantadas contra

En conclusión, la Sala está de acuerdo con el demandante en que la prueba era ilícita, pero consideró que para el caso concreto, dicha prueba no contaminó el proceso judicial.

En esas condiciones, esta primera objeción contra la Sentencia de 2007 no está llamada a prosperar.

b. Desconocimiento de la jurisprudencia constitucional por la no anulación del proceso, sobre la base del convencimiento independiente del juez respecto de la responsabilidad del procesado

El segundo grupo de reproches se refiere al hecho de que la Sentencia de 2007 se hubiera abstenido de anular el proceso de sobre la base de la existencia de pruebas inculpativas independientes. En esa línea, resalta que constituye una causal de nulidad el hecho de que la Sentencia de 2007 no hubiera sustentado con suficiencia por qué dichas pruebas independientes habilitaban a los funcionarios judiciales a vincular penalmente a

**SIN TEXTO**



En relación con el primer punto, es decir, con el hecho de que la Sentencia de 2007 hubiera considerado válido que la condena contra se basara en pruebas independientes a la prueba ilícita, esta Sala considera que no asiste razón al demandante. Ciertamente, un reproche de estas características no puede esgrimirse como causal de nulidad de la sentencia. La conclusión a la que llegó la Corte respecto de la fundamentación de la sentencia condenatoria, específicamente, respecto de la admisión de otras pruebas de convencimiento por parte de los jueces de instancia, constituye el punto final de una reflexión jurídica que depende de la valoración de los elementos de juicio aportados al proceso, de la calificación de las conclusiones a las que llegaron las autoridades demandadas y del sopesamiento de las demás pruebas del expediente.

En otros términos, la decisión de la Sala Quinta constituye una decisión eminentemente jurídica, producto de una reflexión sobre la suficiencia del análisis probatorio de las autoridades penales, por lo que no cabe considerarla como fuente de violación del debido proceso. Debe recordarse sobre dicho particular que “el incidente de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo (...) carece de eficacia para obtener la anulación de la sentencia”.

Cosa distinta es que la decisión de la Sentencia de 2007 no haya estado suficientemente sustentada, pues tal reproche sí podría constituir causal de nulidad del fallo. Ciertamente, la jurisprudencia destaca que la providencia de la sala de revisión de la Corte puede anularse cuando “existe incongruencia entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutive de la misma, que hace anfíbológica o ininteligible la decisión adoptada; igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la decisión carece por completo de fundamentación”.

En el caso de la Sentencia de 2007, la Corte constata que la Sala Quinta sí expuso profusamente las razones por las cuales, pese a haberse detectado la existencia de una prueba ilícita, la sentencia condenatoria no ameritaba anulación, pues el convencimiento judicial respecto de la responsabilidad penal del procesado provino de fuente independiente, toda ella constante en el expediente.

Para demostrarlo, se transcriben los apartes del fallo en los que la Sala justifica la decisión de no anular el proceso, pese a la prueba ilícita en él detectada. La Corte cita in extenso el aparte del fallo que sustenta la posición:

SIN TEXTO



“Con todo, atendiendo a las consideraciones generales de la jurisprudencia, el hecho de que las autoridades competentes hayan admitido como prueba de cargo una prueba manifiestamente inconstitucional no produce la invalidación automática del proceso penal. Tal como lo dice la Corte, es requisito para la invalidación del proceso que la decisión final haya tenido como fundamento la prueba ilícita. De lo contrario, si la convicción del funcionario se forma a partir de elementos probatorios distintos, independientes de la prueba o a los que se habría llegado por otras vías, puede admitirse la subsistencia del proceso, pese a la inconstitucionalidad de la prueba que debe expulsarse.

“En el caso concreto, esta Sala estima que la aducción y valoración de la prueba inconstitucional no afectó la decisión final condenatoria, o, por lo menos, su incidencia en la valoración de la responsabilidad del procesado no fue decisiva.

“- Formación independiente de la convicción del juez penal y ausencia de nulidad del proceso

“La Corte Suprema de Justicia admite explícitamente que aún aceptando la ilicitud de la prueba impugnada por la defensa, la conclusión acerca de la responsabilidad penal del procesado habría sido la misma. Dice al respecto la Corte Suprema:

“En efecto, aun cuando se suprimiera el video como medio probatorio por su eventual ilicitud, la situación jurídica que se define en este fallo no sufriría modificación sustancial pues la reunión en la casa de la [redacted] y la recepción en ella del dinero, son hechos demostrados plenamente con abundante prueba testimonial y aceptados por el mismo acusado”.

“Esta Sala comparte dicha conclusión, atendiendo a la lógica de la Corte Suprema. Para entender la razón de dicha conclusión, sea pertinente volver sobre el contenido del video”.

“En primer lugar, el video obtenido por la denuncia da cuenta de la ocurrencia de varios hechos concretos: la grabación registra una habitación en la que están dispuestas dos sillas y un escritorio que las separa. La filmación ilustra el ingreso de dos personas que ocupan las sillas. En la grabación aparece que ambos sujetos sostienen una charla y el hecho de que uno entrega a otro una bolsa con dinero, que luego de ser contado, es devuelto a la bolsa, tras lo cual los protagonistas abandonan la escena”.

“Efectuada la descripción del video, esta Sala concluye que ninguno de los hechos registrados por la grabación agrega hechos distintos a los admitidos por la denuncia

**SIN TEXTO**



y por el propio imputado, los cuales hubieran sido aprovechados por la Corte Suprema de Justicia para endilgar la responsabilidad penal a [redacted].”.

“En efecto, el contenido de la denuncia y de la indagatoria, así como de testimonios concordantes, arrojan una coincidencia descriptiva acerca de los hechos que quedaron registrados en la cinta de video, pues tanto [redacted] como el propio [redacted] y los apartes de los demás testimonios recaudados, admiten que en la casa en que supuestamente se celebró la reunión, éste se entrevistó con un tercero que le entregó un dinero, que aquél recibió y con el cual salió de la habitación. La descripción de los hechos aquí narrados, admitidos por el propio [redacted] coincide con las imágenes que se captan en la grabación, por lo que no hay en la cinta un hecho adicional que, por un lado, desmienta la denuncia de [redacted] y por el otro secunde la versión de [redacted].”.

“En su indagatoria, [redacted] admite que se le informó de la existencia de la grabación cuando pretendía abandonar la casa, lo cual indica que si éste abandonó o no la bolsa con el dinero, ese fue un hecho no registrado por las cámaras. En esas condiciones, el contenido del video no aporta elementos de juicio distintivos, debatidos, contradictorios o determinantes que permitan, de un lado, justificar la conducta de [redacted] o por el otro, confirmar la versión de [redacted]: tanto [redacted] como [redacted] y, en parte, los demás testimonios, presentan coincidencia en el hecho de que el exgobernador se reunió en una casa, recibió un dinero y luego abandonó la habitación”.

“Las discrepancias surgen, entonces, en relación con el contexto de esa recepción, y no propiamente con los hechos registrados en ella. Las divergencias interpretativas entre los organismos de investigación, la Corte Suprema de Justicia y la defensa no emergen de la valoración de los hechos consignados en el video, sino en relación con el contexto histórico, social, político, fáctico que rodeó la entrega del dinero”.

“La Corte Suprema, apoyada así en las apreciaciones de la Fiscalía, achaca la responsabilidad penal a [redacted] por la recepción de un dinero en las condiciones políticas en que ésta se produjo, gracias al análisis de los indicios, pruebas indirectas, testimonios y hechos admitidos por la propia defensa, que dan cuenta de que las circunstancias en que ocurrió la reunión no podían conducir más que a la conclusión de que [redacted] estaba enterado del origen de la donación. La sentencia se apoya en la versión de la denuncia y en la propia versión de [redacted] para concluir que una persona puesta en las condiciones del procesado – hostigado en varias oportunidades por los grupos de autodefensas- no podía ignorar que la realidad social de su departamento presionaba por todos los medios el ingreso de dineros ilícitos en las campañas políticas. La sentencia entendió que la

**SIN TEXTO**





inminencia de las elecciones y la mala situación financiera de la campaña de

lo hicieron aceptar la donación de un grupo indeterminado de ganaderos, respecto de cuya identidad ni siquiera indagó, siendo ilógico en las condiciones propias del —confirmadas por testimonios de otros alcaldes locales— e incongruente con su aparente lucha vertical con las autodefensas que no averiguara previamente la identidad de sus benefactores”.

“Tampoco resultaba coherente, dijo la Corte, que con el conocimiento de la tensión político paramilitar de la zona y por el hecho de haber sido instigado previamente por grupos ilegales, —un político experimentado de la región— no sospechara de la considerable suma que le había sido ofrecida —inusual, la llama el sindicado en la indagatoria—, como tampoco de la identidad de los donantes, sabido que en materia política nadie hace una contribución económica sin proponer nada a cambio. Dice la Corte entonces que “en materia electoral las cosas suelen funcionar distinto a como operan los negocios comunes y corrientes, pero de ahí no se desprende que no existan procedimientos y reglas cuando de recibir contribuciones se trata —máxime en las condiciones de orden público del —, así como no se pretende que ello ocurra necesariamente en los directorios es inadmisibles que si suceda reuniones que por su lugar, hora y participantes resultan clandestinas” —concluye la Sala de casación en la sentencia”.

“De igual modo, la condena penal se apoyó en indicios que confirmaron las aseveraciones de la Corte respecto de la responsabilidad penal de como la omisión del procesado de denunciar a las autoridades la celada de que había sido objeto, tan pronto supo de la existencia del proceso, y la decisión de reconocerlo tiempo después, sólo cuando se presentó la denuncia en su contra, pese a que como gobernador celebró varios Consejos de Seguridad en los que pudo exponer el caso. La Corte infiere que una denuncia del hecho habría aumentado su capital político en lugar de perjudicarlo”.

“De la misma manera, la Corte acude a las reglas de la experiencia para advertir que si había contactado la recepción del dinero de unos ganaderos, aquél ha debido adoptar las medidas necesarias que no dejaran la menor duda sobre su procedencia al recibirlos, reglas de interpretación éstas que no dependen de la valoración de los hechos del video, sino de la apreciación global y contextualizada de los hechos admitidos por la denuncia, la defensa y los testimonios de cargo y descargo”.

“La Corte Suprema encuentra inaceptable, en suma, que el ex gobernador haya aceptado celebrar la reunión en las condiciones en que tuvo lugar, habida cuenta de sus condiciones personales y de su conocimiento de la región; así como insólito que

**SIN  
TEXTO**

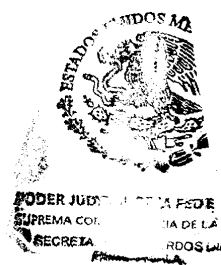


hubiese omitido interesarse en la identidad de los ganaderos –según su indagatoria, en el Departamento de [redacted] la mayoría de profesionales se dedican a la ganadería- y en los intereses burocráticos que pretendían satisfacerse como contraprestación a la donación. Igualmente, que [redacted] no se hubiese abstenido de reunirse para recibir el dinero, a pesar de haberse enterado de que era una reunión de carácter privado, como también que permaneciera en ella a pesar de encontrarse ante un solitario interlocutor del cual muy poco o nada conocía”.

“De los argumentos expuestos por la Corte Suprema se deduce entonces que no fueron los hechos consignados en el video los presupuestos fácticos que motivaron la condena de [redacted] -por lo que es incorrecta la acusación de la demanda según la cual el video es la única prueba de cargo-, sino el análisis del panorama general de la reunión y la recepción del dinero. El análisis de los testimonios y de los indicios constituye la fuente probatoria independiente de la sentencia condenatoria, que no se ve afectada por la prueba inconstitucionalmente recaudada”.

“Esta Sala advierte, no obstante, que algunos de los apartes de la sentencia de la Corte Suprema efectivamente hacen alusión al video y extraen conclusiones del mismo que en principio podrían considerarse como sustento de la asignación de la responsabilidad penal. Particularmente, esta Sala detecta que la sentencia condenatoria hace alusión a los últimos 7 minutos de la grabación, en los que, después de recibir el dinero, [redacted] mantiene una conversación con su interlocutor, de lo cual la Sala de Casación Penal infiere que el ex gobernador conocía al mismo y sabía del origen de los dineros recibidos”.

“No obstante, pese a que respecto de dichos indicios la doctrina impondría su retiro, pues se derivan de la prueba ilícita, lo cierto es que a las conclusiones a las cuales se arriba por virtud de dichas inferencias también se llega por la vía del análisis de los demás indicios, de las declaraciones y de la denuncia, por lo cual debe entenderse que también respecto del conocimiento que [redacted] tenía del origen de los recursos, la sentencia encontró una vía de convicción independiente, que no se vincula directamente con la prueba inconstitucionalmente admitida. En otras palabras, esta Sala entiende que la vinculación que la Corte Suprema de Justicia hace de [redacted] y los dineros ilícitos que recibiría la campaña no depende del análisis de los últimos siete minutos de la grabación, sino, nuevamente, del contexto en que tuvo lugar la entrega de los dineros, del escenario general en que sucedieron los hechos mutuamente admitidos por la denuncia, la indagatoria y los demás testimonios. Por ello, las conclusiones que sobre el particular haya podido extraer la Corte, las apreciaciones concretas respecto de esos últimos minutos de grabación, no tienen la fuerza de convicción necesaria para sostener que constituyen el fundamento jurídico de la decisión, sino son argumentos de refuerzos de una conclusión previamente extraída”.



**SIN TEXTO**

“Sobre la base de lo dicho, esta Sala de Revisión considera que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, adoptada con fundamento en la acusación formal de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de haber admitido como prueba de cargo una prueba obtenida con violación del derecho fundamental a la intimidad, no es constitutiva en su conjunto de vía de hecho, puesto que la sentencia condenatoria penal tiene como fuente de convicción, elementos probatorios independientes de la prueba ilícita que justifican, por sí mismos, de manera autónoma, la asignación de la responsabilidad penal al condenado

“En conclusión, para la Sala, la Corte Suprema aceptó y valoró una prueba que no debió ser aportada al proceso, por ser inconstitucional, pero no por ello incurrió en vía de hecho al dictar la sentencia condenatoria, en tanto que el fallo es razonable y no es arbitrario”.

De acuerdo con los apartes transcritos, es claro que la Sentencia de 2007 sí sustentó de manera completa las razones por las cuales, a su juicio, la condena contra se fundamentó en pruebas y razones independientes de la videograbación. Sin pretender hacer un nuevo análisis sobre el material probatorio aportado al expediente –labor que excede las competencias del juez de tutela- la Sala Quinta entendió que el contenido del video allegado al expediente no ofrecía descripción de hechos distintos a los admitidos durante el proceso penal. En la misma línea, la sentencia hoy cuestionada entendió que los testimonios recibidos en el proceso, los indicios, el contenido mismo de la indagatoria y de la denuncia, el análisis del contorno histórico, del contexto social en que ocurrieron los hechos, eran piezas suficientes para considerar que la reunión en la que tuvo lugar la entrega del dinero -lo cual el mismo sindicato admitió- no había tenido lugar en los términos de la defensa, sino que había sido concertada para recibir dineros provenientes de otras fuentes.

Si la Sentencia de 2007 no profundizó en la crítica de dichas conclusiones fue debido a que las competencias del juez de tutela le impiden revisar de nuevo la valoración del material probatorio, a menos que se compruebe que la misma ha sido francamente arbitraria. No obstante, en las providencias mencionadas, tal arbitrariedad no fue detectada, por lo que el requisito establecido por la Corte para la procedencia del amparo no fue dado por cumplido, cual es que la irregularidad procesal tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, y que el defecto probatorio indique que el juez tomó la decisión sin acudir al contenido de las pruebas aportadas al proceso.

**SIN TEXTO**



Por las razones expuestas, este cargo tampoco es de recibo.

3. Adicionalmente, la petición de nulidad advierte que la falta de exclusión de la prueba hizo que los demás elementos probatorios quedaran contaminados por el contenido de la misma, lo cual no fue detectado por la Sentencia de 2007.

En relación con este reproche, la Sala entiende que la inconformidad de la solicitud de nulidad recae sobre el fundamento jurídico de la decisión, pues el impugnante sostiene que la Sala Quinta no analizó suficientemente por qué la exclusión de la prueba ilícita no derivaba en la nulidad del proceso, si las demás pruebas estaban contaminadas.

Pese a que este reproche no constituye, a la luz de la jurisprudencia constitucional, causa de anulación de la Sentencia, pues no se refiere a la violación del debido proceso, sino a la fundamentación jurídica de la decisión, esta Corte encuentra que, de todos modos, la objeción es improcedente en tanto el análisis correspondiente si se hizo en la Sentencia de 2007.

En efecto, esta Corporación considera que la no contaminación del proceso se deriva implícitamente de las conclusiones extraídas por la Sala Quinta pues, para ésta, la convicción a la que llegó la Corte Suprema de Justicia respecto de la responsabilidad penal del procesado no se deriva del contenido de la prueba ilícitamente recaudada, sino que provino de otras fuentes de información que fueron allegadas al proceso.

Al admitir que las mismas eran independientes de la prueba ilícita, la Sala reconoció que su fuerza de convicción era autónoma del video. De hecho, la Sala misma lo admite al señalar que “ninguno de los hechos registrados por la grabación agrega hechos distintos a los admitidos por la denuncia y por el propio imputado, los cuales hubieran sido aprovechados por la Corte Suprema de Justicia para endilgar la responsabilidad penal a

Ahora bien, en este punto, la Corte admite que la sentencia acusada no hizo referencia explícita a los conceptos de vínculo atenuado y descubrimiento inevitable, utilizados por la doctrina como criterios de excepción a la exclusión de la prueba ilícita. De acuerdo con estos criterios, si la prueba derivada tiene un vínculo atenuado con la prueba ilícita o si aquella hubiera sido de todas formas obtenida mediante medio lícito, no hay lugar a excluirla del proceso pese a la existencia de la prueba ilícita.

**SIN TEXTO**





No obstante, a juicio de la Corte, la sola ausencia de mención a dichos conceptos no hace nulo el fallo de la Sala, pues el análisis que corresponde a esa circunstancia específica, que impide excluir una prueba de algún modo relacionada con la prueba ilícita, está contenido en el análisis que la Sala hizo respecto de la independencia de las pruebas de convicción. La tesis estuvo presente en el análisis que hizo la Sala, al punto que el fallo citó expresamente la Sentencia de 2002, en la que se manifiesta que “el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como vía de hecho”<sup>[67]</sup>. Así, “**sólo** en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la **única** muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”<sup>[68]</sup>. De tal manera que la incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada”.

De otro lado, el análisis hecho por la Sala Quinta hace referencia a la formación independiente de la convicción judicial como fuente de legitimidad de la sentencia condenatoria, lo cual implica que, para la misma, la decisión de la autoridad penal se erigió sobre la base de otros elementos, independientes, autónomos. El que la Sala no haya mencionado la tesis del descubrimiento independiente de la prueba derivada no significa que haya dejado de analizar el punto, pues no necesariamente las pruebas que sirvieron de base a la convicción del juez son de aquellas cuyo descubrimiento pudo darse por vía independiente. En cuanto al vínculo atenuado, la Sala tampoco hizo referencia, pero el hecho de que las pruebas que sirvieron de base a la sentencia hayan sido independientes de la prueba de video da a entender que su vínculo tampoco era atenuado, sino autónomo.

### **De las Presunción de Inocencia**

El derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria

Con las pruebas directas de cargo, y la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia

### **COMENTARIO**

**SIN TEXTO**

ESTADOS.  
PODER II  
EXTREMA  
ECRE

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL CASO

ES UN CLARO EJEMPLO DE LO EXPUESTO, PUES BASADO EN LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA Y PRUEBAS INDICIARIAS, ESTAS SUSTENTAN UN PROCEDIMIENTO CONDENATORIO EN SU CONTRA, UBICÁNDOLA EN MODO, TIEMPO Y LUGAR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, DE PORTACIÓN Y POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

EN PERU

EXP. N.º

LIMA

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

MINISTERIO DE LA FEDERACIÓN  
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
ÁREA DE ACUERDOS DE LA  
PRIMERA SALA

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, que se agregan.

### **1.§ Delimitación de la pretensión y de la materia controvertida**

1. La demanda tiene por objeto que se declare la nulidad del auto de apertura de instrucción, de fecha 21 de octubre de 2008, emitido por el juzgado emplazado en el Exp. N.º 2008, en virtud del cual se resolvió abrir instrucción en contra del beneficiario como presunto autor de los delitos de patrocinio ilegal, de cohecho pasivo propio y de tráfico de influencias, y como presunto cómplice primario del delito de negociación incompatible.

Se alega que el auto de apertura cuestionado afecta los derechos al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y al debido proceso del beneficiario, en conexión con su derecho a la libertad individual, por cuanto las pruebas de cargo que sustentan el auto de apertura de instrucción son pruebas prohibidas, toda vez que son producto de interceptaciones telefónicas.

En dicha línea argumentativa, también se pretende que se le ordene al juez emplazado que en el Exp. N.º 2008 dicte a favor del beneficiario un auto

**SIN TEXTO**



denegatorio de instrucción, debido a que no existen pruebas lícitas que sustenten la instrucción que se le sigue.

2. Delimitadas las pretensiones y los alegatos que sustentan la demanda, este Tribunal considera necesario pronunciarse sobre algunas cuestiones que plantea la denominada prueba prohibida en el proceso penal, también conocida en la doctrina como prueba ilícita o prueba inconstitucional. Para ello, se habrán de responder las siguientes interrogantes ¿cuál es la naturaleza jurídica de la prueba prohibida?; ¿la prueba prohibida es un derecho constitucional explícito, un derecho constitucional no enumerado o es el contenido implícito de un derecho constitucional?; y ¿qué efectos genera la prueba prohibida en el proceso penal?

A continuación de ello se analizará el contenido del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, así como sus límites, debido a que en la demanda se alega que se habría producido la presunta vulneración de este derecho.

## **2. § Naturaleza jurídica de la prueba prohibida**

3. En la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada no existe consenso para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la prueba prohibida. Así, existen posiciones que consideran a la prueba prohibida como una garantía objetiva del debido proceso penal que es absoluta y que resulta aplicable a cualquier clase de procedimiento o proceso.

Como muestra de que en algunos ordenamientos constitucionales la prueba prohibida es considerada como una garantía objetiva del debido proceso penal, puede citarse a la fracción IX, del inciso a, del artículo 20º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto dispone que el proceso penal se regirá, entre otros, por el principio de que "[c]ualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula".

4. De otra parte, existen otras posiciones que predicen que la prueba prohibida es un auténtico derecho fundamental que garantiza que el medio probatorio prohibido no sea admitido, ni actuado o valorado en el proceso penal como prueba de cargo, pero que, como todo derecho fundamental, admite limitaciones en su ejercicio.

En sentido contrario, corresponde destacar que en alguna oportunidad el Tribunal Constitucional español consideró que la prueba prohibida no era un auténtico derecho constitucional. Así, en el Auto 1º/1984, del 16 de mayo de 1984, se destacó que el principio de prohibición de utilizar los medios de prueba ilícitamente

**SIN TEXTO**



obtenidos “no se apoya en ninguna norma de derecho positivo ni de la Constitución, ya que no existen disposiciones legales en qué apoyar tal principio y doctrina”.

5. También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del derecho fundamental a la prueba. En este sentido, en la STC este Tribunal precisó, entre otras cosas, que el medio probatorio debe ser lícito, es decir, que no “pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico”, pues se trata de “supuestos de prueba prohibida”.

En sentido similar, en la este Tribunal destacó que “el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios de la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del derecho”.

6. Desde otra perspectiva, la jurisprudencia norteamericana considera que la regla de la exclusión (*exclusionary rule*) de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales tiene como funciones esenciales el efecto disuasorio (*deterrence effect*) frente a las conductas de los oficiales de la Policía que vulneren algún derecho fundamental para obtener material probatorio y la integridad judicial (*judicial integrity*). En buena cuenta, en la jurisprudencia norteamericana la regla de la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente no constituye un auténtico derecho fundamental, sino que presenta una función disciplinaria en la medida que busca prevenir y evitar las conductas policiales ilícitas.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en la sentencia del Caso (1976), declaró que “la regla por la que se excluye la prueba obtenida en violación de la IV Enmienda tiende a garantizar los derechos generalmente reconocidos en dicha enmienda a través de un efecto disuasorio (de la violación misma) y no tanto como expresión de un derecho constitucional subjetivo de la parte agraviada”.

7. En resumen, en la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada resulta variable la naturaleza jurídica que se le pretende atribuir a la prueba prohibida. No obstante ello, en consideración de este Tribunal la prueba prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, que garantiza a todas las personas que el medio probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona, o que prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para decidir la situación jurídica de una persona. En este sentido, debe destacarse que la admisibilidad del

**SIN TEXTO**



⌋

⌋

⌋

⌋



medio probatorio en cualquier clase de procedimiento o proceso no se encuentra únicamente supeditada a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud.

## **2.1. § El fundamento de la prueba prohibida**

8. Con relación al fundamento que garantiza la inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba prohibida en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona, este Tribunal considera pertinente enfatizar que también en la dogmática constitucional comparada no existe consenso para concluir que el derecho a la inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba prohibida tiene un único fundamento.

9. Así, existen posiciones que consideran que la inutilización de la prueba prohibida encuentra sustento en el contenido del derecho-principio a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla” [sentencia del 18 de agosto de 2000, párr. 120].

En este sentido, se destaca que la presunción de inocencia como primera garantía del proceso penal exige no sólo que exista una mínima actividad probatoria de cargo, sino también que la obtención de las fuentes de prueba se produzca sin la violación de algún derecho fundamental.

10. De otra parte, se considera que el fundamento de la inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba prohibida para decidir la situación jurídica de una persona, se encuentra contenido en el derecho a la tutela procesal efectiva (debido proceso) o en las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos fundamentales previstas en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

11. En sentido similar, se pone de relieve que el fundamento de la exclusión de la prueba prohibida descansa en el derecho a la vida privada reconocido en el artículo 11° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus familias, sus domicilios o su correspondencia. Como complemento de lo dicho, también se ha señalado que el fundamento de la prueba prohibida se encuentra en el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

**SIN TEXTO**



12. Proponiendo una concepción amplia sobre la fundamentación de este derecho, el Tribunal Constitucional español en la .../2000, del 28 de febrero de 2000, ha destacado que “la interdicción de la admisión de la prueba prohibida por vulneración de derechos fundamentales deriva directamente de la Constitución, por la colisión que ello entrañaría con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad de las partes”, y se basa asimismo “en la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables”.

## **2.2. § La prueba prohibida en la Constitución**

13. Nuestra Constitución prevé pruebas expresamente prohibidas. Así, conforme al inciso 10), del artículo 2º de la Constitución, no tienen efecto legal los documentos privados que han sido abiertos, incautados, interceptados o intervenidos sin la existencia de un mandato judicial debidamente motivado.

En sentido similar, el literal h del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución reconoce que carecen de valor las declaraciones obtenidas por: **a)** la violencia moral, psíquica o física; **b)** la tortura, y **c)** los tratos humillantes o denigrantes.

14. En el ámbito del proceso penal, la prueba prohibida se encuentra expresamente reconocida en el artículo 159º del Nuevo Código Procesal Penal, cuyo texto dispone que “[e]l Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona”.

15. De este modo, en nuestro ordenamiento jurídico una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga mediante la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, mas no de los derechos de rango legal o infralegal.

## **2.3. § Los efectos de la prueba prohibida**

16. En el ámbito del proceso penal la consecuencia de la prueba prohibida se encuentra reconocida en el artículo 159º del Nuevo Código Procesal Penal, al señalar que “[e]l Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona”.

**SIN TEXTO**



Como puede advertirse, el Nuevo Código Procesal Penal plantea la prohibición de que el juez pueda utilizar determinados medios de prueba que se hubieran obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales.

17. En el ámbito constitucional, en la este Tribunal destacó que el literal h del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución prescribe que “el derecho a que se establezca la invalidez de las declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia en sentido lato” tiene “como fin enervar el valor jurídico de aquellas revelaciones o exposiciones alcanzadas mediante cualesquiera de las formas de agresión anteriormente señaladas”.

### 3.§ Interceptación y grabación de las conversaciones telefónicas

18. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del del 6 de julio de 2009, ha precisado que el derecho a la vida privada previsto en el artículo 11° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege “las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que desarrolla”.

De ese modo, el derecho a la vida privada tutela “a las conversaciones telefónicas independientemente de su contenido e incluso puede comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones”.

En definitiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que “la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación”.

19. Como todo derecho fundamental, la vida privada no es un derecho absoluto, por lo que puede ser restringido siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; esto es, que tales injerencias deben encontrarse previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y ser idóneas, necesarias y proporcionales en una sociedad democrática (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos

**SIN TEXTO**



Humanos). Semejante situación sucede con el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del [redacted] precisó que la interceptación telefónica, al representar una seria interferencia en la vida privada, para que sea legítima “debe estar fundada en la ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada; las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir, entre otros elementos”.

20. Pues bien, en el presente caso se advierte que las conversaciones telefónicas del beneficiario que sirven de fundamento al auto de apertura que se cuestiona no fueron interceptadas por agentes del Estado, por lo que la injerencia arbitraria en su vida privada no le es imputable al juez demandado, ni al fiscal que interpuso la denuncia. En este sentido debe destacarse que las conversaciones telefónicas del beneficiario no constituían información pública, por lo que su divulgación a través de los medios de prensa sin la autorización del beneficiario se tornó inconstitucional.

Por esta razón este Tribunal considera que el Estado debe investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violación del derecho a la vida privada del beneficiario, consistente en la interceptación y divulgación de sus conversaciones telefónicas, así como la entrega de las conversaciones telefónicas a los medios de comunicación. Asimismo debe precisarse que la divulgación de las grabaciones telefónicas requiere de la autorización de sus interlocutores para que se legitima.

21. Para evaluar la incidencia de las pruebas prohibidas en la situación jurídica del beneficiario, este Tribunal considera necesario examinar en abstracto el conjunto del proceso penal a fin de verificar la afectación del derecho al debido proceso, y si la decisión sobre la situación jurídica del demandante se fundamenta, o no, en pruebas prohibidas. Como el proceso penal aún no ha concluido, la presente demanda ha sido presentada en forma prematura, por lo que deviene en improcedente.

Debe destacarse que el criterio del análisis global para evaluar la relación entre prueba prohibida y debido proceso penal también es utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, en la sentencia del [redacted], del 12 de julio de 1988, se precisó que no se puede “excluir en principio y en abstracto que se admita una prueba conseguida ilegalmente” porque sólo “le corresponde averiguar si el proceso” considerado “en su conjunto fue un proceso justo”.

**SIN TEXTO**



✓

✓

✓

✓



22. Finalmente ante la práctica de públicas difusiones de conversaciones interceptadas, este Tribunal debe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso ha enfatizado que:

a. Cuando las conversaciones telefónicas son de carácter privado y no constituyen información pública, su divulgación requiere de la autorización de los interlocutores, caso contrario, su divulgación se torna ilegítima [párrs. 129 y 147].

b. La divulgación de cintas grabadas sin la autorización de los interlocutores configura una violación del derecho a la honra y a la dignidad de toda persona, en el cual se incluye su privacidad, según el artículo 11° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, leído en conjunto con los artículos 30 y 32.2 del mismo instrumento [párr. 147].

c. La divulgación de conversaciones telefónicas que se encuentran bajo secreto de justicia por agentes del Estado implica una injerencia en la vida privada, la honra y la reputación de los interlocutores [párr. 158].

23. En concordancia con ello, debe recordarse que el inciso 10) del artículo 2° de la Constitución dispone que las “comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley”.

Por esta razón, los medios de comunicación social se encuentran prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, salvo que exista la autorización de los interlocutores grabados para que sea conocida por terceros o un mandamiento judicial motivado que permita su difusión por ser de interés público, bajo responsabilidad de ser denunciados penalmente.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

**SIN TEXTO**



## EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Se usó desde hace casi 100 años la teoría del **"Fruto del árbol envenenado"** como una metáfora legal que se utiliza para describir que las pruebas que se obtienen de manera ilegal no pueden usarse, como tampoco sus derivados. La lógica de la terminología es que si la fuente de la evidencia (el "árbol") está contaminado, entonces cualquier cosa adquirida de ella (el "fruto") está manchado también.

La doctrina es una extensión de la regla de exclusión, que, con algunas excepciones, impide que las pruebas obtenidas en violación de la Cuarta Enmienda puedan ser admitidas en un juicio penal. Al igual que la regla de exclusión, el fruto del árbol venenoso es una doctrina que tiene la intención de disuadir a la policía del uso de ~~medios~~ ilegales para obtener pruebas.

La doctrina está sujeta a las cuatro principales excepciones. La evidencia contaminada es admisible si: se descubrió en parte como resultado de una fuente independiente, no contaminada; o inevitablemente sería descubierta a pesar de la fuente contaminada; o la cadena de causalidad entre la acción ilegal y la evidencia contaminada es demasiado atenuada, o la orden de allanamiento no se basa en una causa probable y fue ejecutado por agentes del gobierno de buena fe (llamado la excepción de buena fe).

La doctrina del "fruto del árbol venenoso" se deriva del caso

En este caso de la Corte Suprema de EE.UU. en el que [REDACTED] intentó evadir el pago de impuestos. Los agentes federales se apoderaron ilegalmente de los libros fiscales de [REDACTED] y obtuvieron copias de los registros. La cuestión en este caso es si los derivados de la prueba ilícita son admisibles en los tribunales. El fallo indicó que permitir que los derivados fueran aceptados alentaría a la policía para eludir la Cuarta Enmienda, por lo que la prueba ilícita copiada estaba contaminada y era inadmisibile.

Sobre la exclusión de buena fe la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que:

**SIN TEXTO**



EN - (1995) La Corte explico la teoría de exclusión de prueba (exclusionary rule) claramente señalando que no tiene por objeto sancionar a magistrados y jueces, sino que los agentes de la ley tengan una sanción por violar derechos de los ciudadanos a la cuarta enmienda.

"La Cuarta Enmienda indica que" el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra registros e incautaciones irrazonables, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos, sino por motivo fundado (causa probable), que estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas a ser incautadas ". Hemos reconocido, sin embargo, que la Cuarta Enmienda no contiene ninguna disposición que expresamente se opone a la utilización de pruebas obtenidas en violación de sus comandos. Véase

(1984). "El mal condenado por la Cuarta Enmienda es completamente realizado por un cateo o aseguramiento ilegal en si mismo", ibid. (citando el caso (1974)), y el uso de los autos para la búsqueda en el pasado o la incautación ilegal,"no hace otra nuevo daño a la Cuarta Enmienda", (citando a , pág 354).

"La cuestión sobre si el remedio a la regla de exclusión es apropiada en un contexto particular, y ha sido durante mucho tiempo considerada como una parte separada de si los derechos de la Cuarta Enmienda que una parte intenta invocar la regla fueron violados por la conducta de la policía".

(1983), véase también

(1980), (1976); en

La regla de exclusión opera como un remedio judicial creado para proteger contra las violaciones futuras de los derechos de la Cuarta Enmienda a través de efectos de la regla general de disuasión. en regla de exclusión no da lugar a la disuasión apreciable, entonces, claramente, su uso... no se justifica.

(1976).

En , hemos aplicado estos principios en el contexto de una búsqueda policial en el que los agentes habían actuado objetivamente de manera razonable por que la confianza en una orden de allanamiento, emitida por un magistrado neutral e imparcial, que mas tarde se determinó que era inválido. , en . Sobre la base de tres factores, se determinó que no había ninguna razón sólida para aplicar la exclusión como medio de disuadir la mala conducta por parte de los funcionarios judiciales que son responsables de la emisión de órdenes. Véase 480

(1987) ( ). En primer lugar, observamos que la regla de exclusión fue diseñado históricamente para disuadir la mala conducta

**SIN TEXTO**



policial en vez de castigar los errores de los jueces y magistrados. " en  
 ( ). En segundo lugar, no había "no hay evidencia  
 que sugiere que los jueces y magistrados se sienten inclinados a ignorar o subvertir  
 la Cuarta Enmienda y la anarquía que entre estos actores requiere la aplicación de  
 una sanción que es extrema como la exclusión." (citando a  
 pág 916). En tercer lugar, y de gran importancia, no había ninguna  
 base para creer que la exclusión de las pruebas incautadas en virtud de una orden  
 judicial tendría un efecto disuasorio importante en el juez o magistrado que la dicta.  
 en 348.

En el caso , el Tribunal examinó a continuación si la aplicación de la regla de  
 exclusión podría esperar alterar el comportamiento de los agentes de la ley, ahí  
 llegamos a la conclusión: "Cuando la conducta del funcionario es objetivamente  
 razonable, con exclusión de la prueba no será consecuente para promover los fines  
 de la exclusión descartar de ninguna manera apreciable porque es dolorosamente  
 aparente que los oficiales están actuando como un oficial razonable y deben y  
 pueden actuar en esas circunstancias. Excluyendo la evidencia no puede de  
 ninguna manera afectar la conducta futura a menos que el producto sea que lo  
 hagamos menos dispuestos a cumplir con su deber". pág  
 ( )).

Véase también el (1984) ("[S]  
 suprimiendo pruebas porque el Juez falló en hacer correcciones de su Secretario  
 necesarias a pesar de que dio la seguridad de que esos cargos serían hechos no  
 servirían para detener futuros elementos de función abstención que la regla  
 exclusionaria busca lograr". Por lo tanto, determinamos que "los beneficios son  
 marginales o inexistentes que produce la supresión de la evidencia obtenida en la  
 creencia en una razonabilidad objetiva y subsecuentemente invalida la búsqueda  
 que no puede justificar el costo de la exclusión. pág 922.

El demandante se basa en los  
 (1985), y arguye que la evidencia asegurada en el incidente de su detención debe  
 ser suprimida porque él fue víctima de una violación de la Cuarta Enmienda. El  
 escrito del solicitante en los puntos 10-12, 21-22. En , la Corte determinó  
 que la evidencia que es descubierta como resultado de un control policial de  
 conformidad con (1968), era admisible porque los  
 oficiales que hicieron el control lo hicieron actuando razonablemente y basándose  
 objetivamente en una orden que había sido emitida por los funcionarios de otro  
 departamento de la policía, que tenían una sospecha razonable para justificar que  
 pudiera ser detenido Debido a que el Tribunal  
 determinó que no había habido violación de la Cuarta Enmienda, En , la Corte

**SIN TEXTO**





nunca consideró si las pruebas incautadas deberían haber sido excluidas.  
no se contradice con nuestras declaraciones anteriores de que "a preguntarse si el  
remedio regla de exclusión es apropiada en un contexto particular, ha sido  
considerado como una cuestión independiente de la cuestión de si los derechos de  
la Cuarta Enmienda de la parte que solicita a la invocación de la regla lesionada por  
la conducta policial. "

(1995) ::



LA INTERACCIÓN  
DE LA AMORAL  
DE LA JUEZA  
SALA

**SIN TEXTO**

RODET  
LONDRE  
ESTADO

El quejoso también argumenta que Wyoming Penitenciaria del Estado, (1971), obliga a la exclusión de prueba. En la Corte determinó que la Cuarta Enmienda había sido violada cuando los oficiales de la policía arrestaron a [redacted] y recuperaron pruebas de cargo basadas en un informe radial de que dos sospechosos habían participado en dos robos. Id at, [redacted] Sin embargo la policía tiene derecho a actuar a partir de la exigencia de la "solitud por radio", la Corte determinó que había habido una violación de la Cuarta Enmienda porque la denuncia inicial, en la que se basa la orden de detención y la solicitud de radio posterior, era insuficiente para respaldar una evaluación independiente judicial de causa probable. Id at, [redacted] El Tribunal concluyó que "una detención ilegal no puede ser aislada de la impugnación por la decisión del oficial de instigar a confiar en compañeros para hacer el arresto." Ibid. Debido a que el "arresto violó | derechos constitucionales en virtud de las Enmiendas Cuarta y Decimocuarta. La evidencia asegurada en el mismo incidente debió haber sido excluida de su proceso (1961)" Id.,

Nuestro enfoque es coherente con la posición de los jueces disidentes en nuestro único caso importante desde [redacted] la participación de la excepción de buena fe para la regla de exclusión. En ese caso, el Tribunal consideró que la excepción de buena fe se aplica cuando un agente realiza una búsqueda en la dependencia objetivamente razonable sobre la constitucionalidad de una ley que posteriormente se declaró inconstitucional.

Señala que incluso los jueces disidentes en [redacted] están de acuerdo en que [redacted] siempre que el marco adecuado para analizar si la regla de exclusión aplicada, sino que simplemente pensaba que "la aplicación de fundamentos establecidos [redacted] le [d] a un resultado contrario". ( [redacted] ). En suma, el demandado no nos persuaden de abandonar el marco

Aplicando el razonamiento de [redacted] a los hechos de este caso, se concluye que la decisión de la Corte Suprema de Arizona debe ser revertida. La Corte Suprema de Arizona determinó que no podía "apoyar la distinción ... entre errores administrativos cometidos por las fuerzas del orden y errores similares por los empleados de la corte," [redacted] , y que " aun en el supuesto de que ... la responsabilidad por el error de créditos pendientes con la corte de justicia, no se sigue que la regla de exclusión debería ser aplicable a estos hechos ", ibid."

**SIN TEXTO**



## XV. LA PRUEBA INDICIARIA COMO MECANISMO PROBATORIO EN LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA.

Por otro lado, Michel Diban consultor de la ABA y de la UNODC en su curso sobre Prueba Indiciaria o Indirecta para Comprobar el Lavado de Activos y Otros Delitos Graves

Afirma que la "La actividad probatoria debe ser suficiente para generar en el Tribunal la convicción de:

- 1.- la existencia del hecho punible
- 2.- la responsabilidad penal de los partícipes.

Señala que la Prueba es la "verdad judicial", pues la verdad historica quedo en el pasado

"La prueba no reproduce el hecho ocurrido, porque quedó definitivamente anclado en el pasado"

"El objeto del juicio penal es la reconstitución de la verdad histórica del hecho y su conocimiento de forma indirecta."

Se trata de una actividad probatoria que tiene que analizar los hechos subjetivos, es decir los que no pueden ser aprehendidos de una manera tangible por los sentidos.

el dolo en su doble acepción de conocimiento y consentimiento.

Su probanza es distinta a la de los hechos físicos.

Hechos objetivos, lesión, muerte, fuerza.....

Hechos subjetivos y hechos objetivos con consecuencias jurídicas

Las técnicas probatorias de los hechos materiales no sirven para la prueba de hechos subjetivos, que sólo existen en la esfera psíquica y volitiva del sujeto.

"Prueba directa y prueba indirecta"

En la prueba directa:

SIN TEXTO



El objeto de la prueba y el hecho a probar coinciden.

Entre el objeto a reconocer y el Juez no hay intermediario.

En sentido estricto, son prueba directa solo el reconocimiento judicial y la inspección ocular.

En sentido amplio, también testimonios, confesión y documentos.

"Prueba directa y prueba indirecta"

En la prueba indirecta el objeto de la prueba está constituido por un hecho distinto del que debe ser probado, pero que es jurídicamente relevante a los efectos de la decisión.

Hay un hecho probado y un hecho a probar

Hecho probado es el hecho base

Hecho a probar es el hecho consecuencia

En la prueba indirecta

La relación de hechos probados permite alcanzar el hecho a probar, mediante un paso lógico o un juicio de inferencia, razonamiento que legitima la conclusión.

La prueba indirecta se vertebra sobre el indicio, entendido como hecho-base que lleva al hecho consecuencia que se quiere demostrar.

En la prueba indirecta la relación de hechos probados permite alcanzar el hecho a probar, mediante un paso lógico o un juicio de inferencia, razonamiento que legitima la conclusión.

La prueba indirecta se vertebra sobre el indicio, entendido como hecho-base que lleva al hecho consecuencia que se quiere demostrar.

En la prueba indirecta La relación de hechos probados permite alcanzar el hecho a probar, mediante un paso lógico o un juicio de inferencia, razonamiento que legitima la conclusión.

**SIN TEXTO**





La prueba indirecta se vertebra sobre el indicio, entendido como hecho-base que lleva al hecho consecuencia que se quiere demostrar. Enjuiciamiento es una tarea valorativa"

No es una actividad matemática o científica ni una ciencia exacta.

Todo juicio es un decir y un contradecir y de esa contradicción.

Sólo puede extraerse UNA VERDAD cuya razonabilidad se encuentra en la MOTIVACIÓN, que es la verdadera actividad judicial.

El enjuiciamiento es una tarea valorativa".

El "plus" de motivación convierte a la prueba indiciaria en Prueba incluso más sólida y garantista.

La técnica de la motivación de la prueba indiciaria es más minuciosa.

Conceptos de indicio.

En la Sentencia Tribunal Supremo Español de., 1989 se afirma que "toda señal o dato que da a conocer lo oculto en virtud de las circunstancias que concurren en ese hecho, dándole carácter de verosimilitud".

Corte Suprema de Justicia Costa Rica Sentencia

"Indicio es todo hecho, objeto, vestigio o circunstancia CONOCIDOS, del cual se infiere lógicamente la existencia de otro DESCONOCIDO"

DOCTRINA GENERAL:

Exigencias de la prueba indiciaria para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia

- a) Debe ser prueba obtenida sin quiebre de derechos y garantías;
- b) Debe ser prueba legalmente introducida en el juicio, sometida a principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción;
- c) Debe partir de hechos plenamente probados;

**SIN TEXTO**



d) Hechos plurales, o excepcionalmente único, pero de una singular potencia acreditativa;

e) Que sean concomitantes al hecho que se trata de probar;

f) Deben estar interrelacionados, de modo que se refuercen;

g) Debe ser prueba razonada y razonablemente valorada, para evitar toda arbitrariedad. prueba indirecta delito de desvío de sustancias químicas: conocimiento del destino.

Inexistencia de negocios lícitos en los que se utilice la sustancia;

Inexistencia de actividades lícitas en general;

Vínculos con personas o actividades de "narcotráfico";

Pagos en efectivo;

Uso de rótulos o etiquetas que no corresponden o genéricas: "solvente para limpieza"; diluyente de pintura"; "líquidos farmacéuticos";....

Adulteración de registros de importación/exportación/ facturas;

Nombres de empresas inexistentes;

Prueba indirecta delito de desvío de sustancias químicas: conocimiento del destino

Uso de empresas de fachada, sin actividades reales;

Domicilios incorrectos o inexistentes;

Documentos de identificación inconsistentes o falsos;

Retiro y/o transporte de los productos por terceros o intermediarios;

Transporte oculto de las sustancias;

Uso de envases impropios o que no corresponden a la sustancia.

Legislación de Ecuador

SIN TEXTO

PODER JUDICIAL DE LA P  
SUPREMACIA CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA DE LA  
PRIMERA - 1A

C

Código de Procedimiento Penal

Art. ...- Debido proceso.-

Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y

FUNDAMENTACIÓN DE LOS FALLOS.

Artículo agregado Ley No. 0, Registro Oficial Suplemento de 24 /3/2009

Código de Procedimiento Penal

Art. 87.- Apreciación de la prueba.-

Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este Código, se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente artículo.

Sana crítica/ Libre Convicción/ Prueba Tasada

Sana crítica el Juez tiene libertad para apreciar el valor o grado de eficacia de las pruebas producidas.

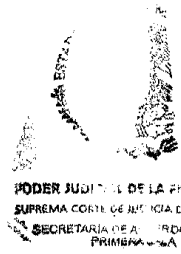
No valora arbitrariamente

Se le exige que determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado, siguiendo las reglas de la lógica, su experiencia, buen sentido y entendimiento humano.

Juez debe fundar sus sentencias y expresar las razones por las cuales concede o no eficacia a una prueba

Código de Procedimiento Penal

Art. 88.- Presunción del nexo causal.- Para que de los indicios se pueda presumir el nexo causal entre la infracción y sus responsables, es necesario:



**SIN TEXTO**

1. Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho;
2. Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones; y,
3. Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean:

Código de Procedimiento Penal

Art. 88.- Presunción del nexo causal.-

3. Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean:

a) Varios;

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí;

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola conclusión; y,

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente.

Hechos subjetivos y hechos objetivos con consecuencias jurídicas

El dolo en su doble acepción de conocimiento y consentimiento

Codificación Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Registro Oficial Suplemento /12/ 2004

Art. 52.- Del facilitamiento de bienes para la realización de actividades de cultivo, producción, almacenamiento o transporte ilícitos.-

Prohíbese la venta, arrendamiento, entrega en anticresis, préstamo o cualquier forma de facilitamiento de bienes, a sabiendas o con razonables y coincidentes indicios de que van a ser dedicados a actividades de cultivo, producción, fabricación, almacenamiento o transporte o tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalización.

El dolo en su doble acepción de conocimiento y consentimiento

**SIN TEXTO**

SECRET  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF DEFENSE  
SECURITY INFORMATION  
FORM 100-10



## Ley N° 2005-12 Para Reprimir el Lavado de Activos

"Art.14.- Comete el delito de lavado de activos el que DOLOSAMENTE, en forma directa o indirecta:...."

### DISPOSICIONES GENERALES. TERCERA.-

"El origen ilícito de los activos, así como su carácter de inusual e injustificado, se determinará por los medios de prueba previstos en la legislación ecuatoriana, correctamente aplicados y valorados conforme a las reglas de la sana crítica y a los principios del debido proceso establecidos en la Constitución Política de República."

El dolo en su doble acepción de conocimiento y consentimiento

### Ley de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas

"Art. 72.- Quienes mantengan bajo su tenencia o cuidado materias primas, insumos, precursores u otros productos químicos específicos A SABIENDAS de que serán utilizados en .... fabricación ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, serán sancionados...."

El dolo en su doble acepción de conocimiento y consentimiento

### Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas / 1988

#### Art. 1º

3.- El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso

### Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

#### Art. 5 Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas

SIN  
TEXTO



Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción / 2003

Art. 28 Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

México Código Federal de Procedimientos Penales/1934

Última Reforma -06-2007

Art. 286.- Los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena.

México Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada/1996

Última Reforma DOF 28-06-2007

Artículo 41.- Los jueces y tribunales, apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.

Perú Código Procesal Penal

Art. 158.- Valoración

1.- En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la Lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.

3.- La prueba por indicios requiere:

- a) Que el indicio esté probado;
- b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia;
- c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes Jurisprudencia

**SIN TEXTO**



Constitucionalidad de la prueba indiciaria

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

18 Enero 1978, '

"a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha aplicado el criterio de la prueba más allá de la duda razonable....

"...tal tipo de prueba se puede obtener de la coexistencia de inferencias suficientemente consistentes, claras y concordantes o de similares presunciones de hecho no rebatidas"

Constitucionalidad de la prueba indiciaria

Tribunal Constitucional Español, desde 1985

"No se puede negar, y el TC no lo ha hecho, la posibilidad de admitir la prueba de presunciones para enervar la inocencia reconocida constitucionalmente".

"ha de reconocerse la posibilidad de que a partir de la prueba de indicios, el órgano judicial deduzca racionalmente la veracidad de los hechos no probados directamente en juicio"

Graves: Características Particulares de la Investigación y Prueba"

Constitucionalidad de la prueba indiciaria

Tribunal Constitucional Español, desde 1985

"el TC ha declarado que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria"

España doctrina absolutamente consagrada y consolidada

Tribunal Supremo Español Sólo primer semestre del año 2004 de un total de 980 sentencias abordó el tema de la prueba indiciaria en 130 sentencias

Los Delitos Graves: Características Particulares de la Investigación y Prueba"

**SIN TEXTO**



Costa Rica

Corte Suprema de Justicia, Sentencia casación, homicidio calificado

"Examinada la sentencia recurrida, no se aprecian en el razonamiento de los juzgadores errores valorativos sobre la prueba indiciaria analizada, que atenten contra el respeto a las reglas de la sana crítica, viciándola de nulidad y conculcando derechos fundamentales del enjuiciado

Costa Rica

Corte Suprema de Justicia, Sentencia casación, homicidio calificado

"En la especie, a falta de pruebas directas, se avocaron los juzgadores al análisis de la prueba de indicios, arribando a una conclusión de certeza sobre la culpabilidad del imputado en la muerte del ofendido."

Costa Rica

Corte Suprema de Justicia, Sentencia casación, homicidio calificado

"... cuando la relación es total o absoluta, que existiendo el hecho primero no pudo menos que haber ocurrido o existido el otro, se trata del indicio necesario o de plena certeza.

Si la relación es más o menos perfecta sin ser absoluta, el indicio es grave y si simplemente es indicadora pero incapaz de formar certeza el indicio es leve"

España Sala Primera del Tribunal Constitucional

La autoría del blanqueo de capitales quedaba probada a partir de una conjunción de indicios debidamente probados:

la estrecha relación entre el recurrente y los otros dos autores del robo, con quienes participó poco después en una acción similar;

la existencia de una relación sentimental entre los recurrentes, probada a partir de las declaraciones de ambos que vivían en la misma casa, como del resultado de la entrada y registro en dicho domicilio;



SECRETARIA DE JUSTICIA



las diversas compras de inmuebles que llevó a cabo la recurrente con pagos en metálico y los aumentos de saldos en sus cuentas corrientes con posterioridad al robo; y,

por último, el hallazgo en el domicilio de ambos de las libretas y joyas sustraídas en las cajas de seguridad del banco.

Los Delitos Graves: Características Particulares de la Investigación y Prueba"

España

Tribunal Supremo Sala de lo Penal S. N° /2001

"Y debe recordarse asimismo que según reiterada y constante doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala de Casación el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria

STC N° /85 y /85 de 17 de Diciembre, 1 y 21 Diciembre 1988"

España

Tribunal Supremo Sala de lo Penal S. N° /2001

SIEMPRE QUE:

existan indicios plenamente acreditados,  
relacionados entre sí y

no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios

y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable."

SSTS de 22 de Noviembre de 1990, 21 de Mayo de 1992, 18 de Junio de 1993, 5 de Marzo de 1998 y 26 de Octubre de 1999-, entre otras.

España

Tribunal Supremo Sala de lo Penal S. N° /2001

Siempre que:

**SIN TEXTO**

CODE  
ZIPRE  
SE

existan indicios plenamente acreditados,

relacionados entre sí y

no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios

y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable."

SSTS de 22 de Noviembre de 1990, 21 de Mayo de 1992, 18 de Junio de 1993, 5 de Marzo de 1998 y 26 de Octubre de 1999-, entre otras.

Chile Tribunal de Juicio Oral en lo Penal

Tráfico ilícito sustancias químicas Rol N° , 30/10/2007

SEXTO: Para tipificar el delito que se imputa a los acusados, es menester que éstos:

- 1.- hayan poseído, portado o transportado algún tipo de precursor o sustancia química esencial,
- 2.- con el objetivo de destinarlo a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas dentro o fuera del país.

Chile Tribunal de Juicio Oral en lo Penal

Tráfico ilícito sustancias químicas Rol N° 30/10/2007

El delito se logró probar:

- 1.- Identidad de la sustancia encontrada en las 336 botellas incautadas;
  - 2.- La calidad de sustancia química esencial del ácido sulfúrico, que se utiliza en la preparación, extracción, fabricación o producción del estupefaciente o psicotrópico;
  - 3.- Principalmente, la forma clandestina en que pretendía ser sacado del país,
- en horas de la noche y por un paso no habilitado, al percatarse de la presencia policial, algunos intentaron darse a la fuga

Los Delitos Graves: Características Particulares de la Investigación y Prueba"

**SIN TEXTO**



Chile Tribunal de Juicio Oral en lo Penal

Tráfico ilícito sustancias químicas Rol 2007, 30/10/2007

4.- Cantidad del mismo, 336 botellas de litro

si bien es cierto que el ácido sulfúrico tiene otros usos legales, ((fertilizante, en la industria petroquímica o en la minería del cobre)), de haber sido éste el caso,

La cantidad no es compatible con actividades legales, en las que es de público conocimiento que son empleados normalmente más de 336 litros de la referida sustancia, ...tampoco resulta lógica la forma clandestina con que se trató de sacar del país, a las 03:30 hrs., en las inmediaciones del poblado abandonado de Pisiga Carpañuelo, a unos 4 metros del límite político con Bolivia

**XVI. ANÁLISIS DE LAS ARGUMENTACIONES RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN /2011, PROMOVIDO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA POR**

**PROCEDENCIA DEL RECURSO**

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene competencia para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia penal del Primer Circuito de diez de febrero de dos mil once, fecha anterior a la entrada en vigor de las reformas constitucionales de amparo y derechos humanos, de 6 y 10 de junio del mismo año; pues el recurso resulta improcedente, conforme al artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece:

Artículo 83.- Procede el recurso de revisión (...)

V.- Contra.....

*Así, resulta improcedente el recurso, ya que el tribunal colegiado no decidió respecto a la inconstitucionalidad de una norma general, ni tampoco hizo una interpretación directa de un precepto constitucional; solamente analizó los conceptos de violación a través de un examen lógico jurídico y comparativo con los preceptos constitucionales que se estimaron violados.*

*Por otra parte, la facultad de atracción del Máximo Tribunal de la República, no es operante, pues debieron atraer el asunto antes de que el tribunal colegiado dictara su sentencia definitiva en el amparo directo.*

*Cualquier razonamiento para declarar procedente el recurso es contrario a derecho y a la seguridad jurídica, en perjuicio de las víctimas del delito,*

**SIN TEXTO**

PODER J.  
SINTEXA  
SECRET  
ESTADOS

✓

✓

✓

✓

quienes también gozan de la protección de sus derechos humanos y, por ende, a que sus agresores reciban una sentencia condenatoria, en la cual se les repare el daño conforme al artículo 20, inciso c), de la Constitución Federal y los Convenios Internacionales Sobre Derechos Humanos suscritos por México; así también, el ordinal 14 constitucional, establece que toda privación de derechos (del ofendido) debe ser por autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y no de manera arbitraria, al hacerse de facultades que no le corresponden; pues las decisiones en materia de legalidad de los tribunales colegiados son terminales y no admiten recurso alguno; de no estimarlo así, todas las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito, dictadas en amparo directo, serían recurribles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

### **DETENCIÓN ILEGAL**

Por cuanto hace al argumento que la quejosa fue detenida en forma ilegal; no es fundado, pues ella fue asegurada en flagrancia; en virtud de que de conformidad con el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de flagrancia cualquier persona puede detener al indiciado, razón de más cuando se trata de policías en el cumplimiento de su deber; flagrancia que se actualizó en el presente caso, ya que los delitos de **Secuestro, Portación y Posesión de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea**, atendiendo al momento de consumación, son denominados por la ley y la doctrina como permanentes o continuos, toda vez que sus efectos se prolongan en el tiempo; luego, si tomamos en consideración que la detención de la quejosa se llevó a cabo en el momento en que portaba un arma de fuego, en unión de su pareja sentimental, el secuestrador cuando juntos salían del , ubicado sobre la carretera libre el 9 de diciembre de 2005, a las 4:30 horas, a bordo de una camioneta ; lo anterior, debido a que otra diversa víctima, en otro proceso, había reconocido en la vía pública a como uno de sus secuestradores; y al regresar los aprehensores a la casa donde radicaban, esto es, al encontraron maniatadas a las tres víctimas del secuestro, el menor y su madre, la señora ; lugar donde también poseían un arma reservada para las instituciones castrenses de nuestro país; por tanto, es evidente que estamos ante la presencia de un caso de flagrancia, lo que indudablemente justificó su detención.

Además, respecto a que fueron obligados a declarar y que no existe certeza de la hora y día de su detención, también es infundado pues la quejosa en su declaración ministerial del nueve de diciembre de dos mil cinco, negó su participación en los hechos, circunstancia que revela que no fue presionada ni inducida para inculparse y, por tanto, ésta declaró con entera libertad,

**SIN TEXTU**





asistida de su defensor y traductor, sin que haya referido nada relativo a que hubiera sido detenida desde el día anterior a su declaración, sin que sea de tomarse en cuenta que su acompañante refirió como fecha de su detención el 8 de diciembre de 2005; pues las víctimas coinciden entre sí y con la parte informativo de la policía aprehensora, en que fueron liberadas el 9 de ese mes y año, entre 4:00 y 4:30 horas y, si bien hay pequeñas diferencias en las circunstancias, no hay contradicción en lo esencial.

## **VIDEOS**

Del análisis de la sentencia reclamada, se observa que el magistrado del tribunal unitario responsable, no tomó en cuenta ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa, el contenido de los videos que fueron transmitidos en un programa de noticias de una cadena televisiva, al advertir que fueron editados; además, por esa misma razón, también se estimó en el amparo que tal situación no le causa agravio a la quejosa, ya que se reitera, las imágenes ahí transmitidas no son las que sustentan la resolución impugnada en amparo, en todo caso, es responsabilidad penal y/o administrativa de la autoridad que permitió el filme y de la empresa que lo hizo; sin que esta circunstancia baste para dejar en libertad a los sentenciados, pues es de mayor entidad los derechos humanos de las víctimas, es decir, la privación de la libertad que sufrieron en manos de los secuestradores, que las violaciones formales secundarias alegadas a favor de la quejosa, como lo es el montaje, la asistencia consular y la asistencia consular y la puesta a disposición del Ministerio Público.

## **PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO**

Con relación al argumento, en el sentido de que

no fue puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público, debe precisarse que del estudio de las constancias que obran en la causa, se desprende que los policías interceptaron y aseguraron a la peticionaria de amparo y a su pareja sentimental a las 4:30 horas del 9 de diciembre de 2005, y posteriormente, fueron puestos a disposición del Ministerio Público a las 10:16 horas de ese mismo día, es decir, en menos de seis horas; esto debido a que en el momento en que los agentes aprehensores se dirigían con los detenidos a las oficinas de la representación social para proceder a ponerlos a disposición de esa autoridad investigadora,

les informó que tenían secuestradas a tres personas en el “

”, y si no regresaban pronto a ese sitio, corría peligro la vida de éstos; lugar donde efectivamente se encontraban privadas de la libertad tres víctimas; por lo que es obvio que el hecho de que no hubieran sido puestos a disposición de la autoridad competente, sin demora, esto es, en el tiempo razonable, obedeció a causas de fuerza mayor, como lo era preservar la vida y la integridad física de los

**SIN TEXTO**



secuestrados, que es un derecho humano, más valioso que aquel derecho formal de que los imputados fueran puestos "inmediatamente" a disposición del Ministerio Público; plazo que resulta inexacto, pues el concepto "inmediatamente" resulta muy subjetivo según las circunstancias del caso.

### **AVISO CONSULAR**

De conformidad con el artículo 128, fracción IV, parte final, del Código Federal de Procedimientos Penales, se establece que si se trata de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda; sin embargo, en el caso, no era procedente conceder el amparo a la quejosa, por esa violación formal, puesto que se dio aviso a la Embajada al día siguiente de la detención de los plagiarios, el diez de diciembre de 2005, a las 12:10 horas.

Ahora bien, si el aviso consular se hizo hasta ese momento, fue porque el Ministerio Público de la Federación se comunicó a la embajada sin obtener respuesta de la citada representación diplomática.

Además, como bien se argumentó en la sentencia reclamada, lo establecido en dicho precepto no tiene por objeto otorgar ventaja alguna o privilegio al extranjero detenido, sino que el propósito es darle la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones que un mexicano; tampoco obliga a la autoridad ministerial a esperar a que el extranjero se encuentre asesorado por la embajada o consulado de su país para recibir su declaración ministerial; ni es válido que por cumplir con lo establecido en ese precepto, deba retrasarse la puesta a disposición del detenido con un juez, en el plazo constitucional de 48 horas, por falta de comunicación a la representación diplomática, pues ello podría llevar a otras violaciones de derechos fundamentales.

Y si bien, la quejosa careció de asistencia consular en su primera declaración ministerial, ésta estuvo asistida de su defensor y traductor, en ese momento y durante todo el procedimiento penal y la eficacia consular fue formalmente notificada al día siguiente.

Además, si no fue consignada ante el juez durante el término constitucional de 48 horas, esto se debió a un arraigo judicial decretado por 90 días, el diez de diciembre de 2005, un día después de la detención; por lo que la consignación de la averiguación previa o ejercicio de la acción penal se realizó sin detenido hasta el tres de marzo de 2006, consecuentemente, se libró orden de aprehensión el cuatro de marzo de ese año, misma que fue ejecutada el ocho del mismo mes y año, dos días antes que feneciera el arraigo; mientras que el auto de formal prisión se le

**SIN  
TEXTO**



⌋

⌋

⌋

⌋

decretó el once de marzo de 2006.

De tal manera que si el arraigo en México está permitido legal y constitucionalmente en caso de delincuencia organizada, la demora en el ejercicio de la acción penal, también está justificada.

Todas estas formalidades del procedimiento penal, de no respetarse, traen como consecuencia la nulidad relativa, es decir, un amparo para efectos, de no haberse consumado irreparablemente por el cambio de situación jurídica (artículo 73, fracción X de la Ley de Amparo); lo que no consideró así el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en su sentencia dictada antes de la reforma sobre derechos humanos de 10 de junio de 2011.

### **FONDO**

En cuanto a las cuestiones de fondo el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que tal como lo advirtió la autoridad responsable, efectivamente se encuentran acreditados tanto los delitos que se le atribuyen a la quejosa como su plena responsabilidad penal al respecto, ya que si bien es cierto que las víctimas no lograron verla a la cara por tenerla cubierta, lo cierto es que proporcionaron algunos datos para su identificación que coincidieron con los de la quejosa, como lo son: su peculiar voz, con acento extranjero, el color y textura de la piel de sus manos, y el color de su cabello; aunado a las circunstancias de la detención, como fueron el que acompañaba a su cómplice, jefe de la banda, cuando salían del " ", este último refirió el lugar donde se encontraban las víctimas, por lo que al trasladarse de regreso al sitio señalado en el que efectivamente se encontraron maniatadas a tres personas que son los testigos principales, más otras testimoniales y actuaciones judiciales; lo cual constituyó la prueba indiciaria permitida por la legislación mexicana, además de ser la única herramienta de los jueces mexicanos para evitar la impunidad en más de 80 ó 90 por ciento de los delitos (artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales), que acredita plenamente tales extremos; lo que hace que la sentencia reclamada no sea violatoria de derechos humanos de la quejosa.

### **PRUEBAS DE CULPABILIDAD**

Es de tomarse en cuenta, entre otras pruebas, en primer lugar, el parte informativo de los policías aprehensores a través del cual pusieron en claro la forma de la detención de la quejosa, y que esta se realizó el 9 de diciembre de 2005, entre las 4:00 y 4:30 horas.

**SIN TEXTO**



La testimonial de la víctima y ofendido del delito

quien desde su primera declaración del 9 de diciembre de 2005, narró la forma en que lo secuestró y como lo tuvieron privado de su libertad; reconociendo ese mismo día a como la misma persona que participó en los hechos, quien además le pinchó un dedo con la intención dolosa de cortárselo, de lo cual se dio fe judicial.

Expresando, entre otras cosas, textualmente lo siguiente (foja 200 y 203 de la sentencia recurrida):

"(...) escucho que una persona del sexo masculino me dijo levántate pero tapado y escuché la voz de una mujer de aproximadamente años de edad, hablaba con acento extranjero, al parecer de origen ya que arrastraba la letra " " al hablar, esa mujer me dijo que me dejaba comida, que eran unos sandwich, (sic) me dijo que no intentara hacerme el héroe, que no hiciera pendejadas, que si no íbamos a acabar mal, y como dije su acento de voz al hablar era de extranjera, arrastrando la letra " " como hablan los La persona del sexo masculino (sic) dijo que me quitara la cobija y me puso de frente a la mujer extranjera que me hablaba y vi que esta traía pasamontañas, y nos lentes oscuros, observe que su cuerpo era de mujer, por su cuerpo, la forma, sus caderas, era muy delgada y vi que su cabello se le salía del pasamontañas, su cabello era largo, de color teñido, al parecer (...)"

"(...) hace aproximadamente tres días, volví a escuchar la voz de la mujer, con acento extranjero, la que digo que habla como persona de origen y que es la misma mujer que me dio los sandwich (sic) de comer y digo que vi con pasamontañas y de cabello teñido color esta mujer llegó a donde me tenían en el cuarto que confeccionaron los secuestradores para tenerme, esa mujer me ordenó que me saliera del cuarto, me dijo que cerrara los ojos, me vendaron mis ojos, me dijo que le iba a mandar un regalito a mi papá, me sujetaron mi mano derecha a mi espalda y la izquierda me la sujetaron, sentí un piquete en mi dedo meñique de mi mano izquierda, le pedí por favor que no me dañara, que respetara mi integridad física y ella me dijo que ni modo que eran gajes del oficio, y ella me dijo que quería que le mandara a mi papá, si un dedo o una oreja, yo le pedía de favor que no me hiciera daño, y me tuvo sentado aproximadamente quince minutos, después me volvió a llevar al lugar o cuarto (sic) donde me tenían secuestrado, sentí mi mano, brazo izquierdo totalmente dormido, la misma mujer me dijo que me iba a dejar en el cuarto un rato para que pensara las cosas, y en la madrugada del día de hoy, como ya mencione fui liberado por personal de la A.F.I. (...)"

**SIN TEXTO**





Declaración que ratificó ante el juez el 30 de mayo de 2006; no obstante el “bombardeo” de preguntas del defensor particular de la procesada, quien más que hacerle un interrogatorio, lo torturó, pues después de un secuestro, la víctima queda afectada y generalmente les da miedo enfrentar a sus secuestradores, situación que definitivamente afecta los derechos humanos de las víctimas.

Por otra parte, \_\_\_\_\_ reconoció plenamente a \_\_\_\_\_, cuando la tuvo a la vista en la Cámara de Hessel el mismo 9 de diciembre de 2005 (página 204 de la sentencia recurrida), en la que dijo:

**“(....) esta es la mujer que me llevó los sándwich (sic) me dijo que no hiciera pendejadas, me sacó del cuarto y me dijo que iban a mandarle un regalo a mi papá, que qué quería un dedo o una oreja, (¿quién me inyectó (....))”**

Declaraciones de las víctimas y ofendidos \_\_\_\_\_ (menor de \_\_\_\_\_ años de edad) y de su madre \_\_\_\_\_ quienes el 9 de diciembre de 2005, relataron circunstancias coincidentes con las relativas por la diversa víctima \_\_\_\_\_ referente a las amenazas y trato que les daban los secuestradores en el mismo lugar ( \_\_\_\_\_ ), así como el cambio de nombres de los secuestradores y de las propias víctimas, y el día y hora en que los elementos de la Policía de la Agencia Federal de Investigación los rescataron; y si bien, en su primera declaración dijeron no reconocer a \_\_\_\_\_ la víctima dijo que estaba enterado del hecho por parte de los policías, y que las personas detenidas eran sus secuestradores, y que por lo tanto denunciaba y procedía en contra de \_\_\_\_\_ y la nombrada (foja 222 de la sentencia recurrida). No obstante ello, en ampliación de declaración manifestó dar las razones por las cuales no mencionó a \_\_\_\_\_ que fue al estado anímico en que se encontraba, y corrigió en el sentido de que la reconocía plenamente como una de las personas que los cuidó en el lugar que estaban secuestrados.

De igual manera, el menor \_\_\_\_\_, en su declaración de 9 de diciembre de 2005, narró su secuestro y el trato que le daban, y si bien no reconoció a la quejosa \_\_\_\_\_ posteriormente sí logró identificarla por su peculiar voz y acento extranjero; el 14 de febrero de 2006, ante el Ministerio Público, dijo que tenía más datos que aportar y señaló: .... ***ahora que ya no tengo tanto miedo, recuerda que la quejosa si participó en el secuestro y es quien les daba de comer***” (foja 186 de la sentencia recurrida); declaraciones que ratificaron ante el juez, de las cuales se desprende lo siguiente:

**SIN  
TEXTO**



*"(...) Que el día que me sacaron sangre de mi brazo izquierdo, la mano que sentí y observé era muy delicada, suave y de piel blanca, esto lo sé ya que como lo he referido anteriormente cuando los secuestradores querían entrar al cuarto en donde nosotros estábamos, tocaban la puerta tres veces y nosotros teníamos que taparnos la cabeza con una cobija y al meter la mano dentro de la cobija para sacarme sangre, observé que la mano era de una mujer de piel , misma mano que no era de las manos habituales que me habían tocado en anteriores ocasiones, ya que éstas eran toscas y rasposas, cabe aclarar que antes de que me sacaran sangre, me movieron del cuarto, donde estaba en cautiverio, tardando aproximadamente una hora y una vez que me regresaron al cuarto donde permanecí en cautiverio junto con mi mamá le comenté a mi mamá que la persona que me sacó la sangre había sido una mujer, ya que le vi las manos, mismas que eran suaves y de piel . Por otra parte, recuerdo que cuando me estaba sacando la sangre escuché que la misma persona que me la sacó pronunció unas palabras que eran las siguientes "aprieta el brazo" y en ese momento escuché que esta persona pronunció como extranjera, con un acento raro y no con el tono de mexicana, también recuerdo que en una ocasión cuando estábamos en la segunda casa de seguridad, mi mamá pidió unas aspirinas (....)"*

Mismos elementos que apoyados en otras testimoniales, como la de quien es el padre del menor secuestrado; así como la de , vendedor ambulante de fruta (foja 208 de la sentencia recurrida), entre otros, que concatenados con las actuaciones policiales y ministeriales, conforme a la prueba circunstancial, acreditan la participación de en los secuestros de las ahora víctimas y, consecuentemente, la privación de su libertad personal derivada de la sentencia reclamada, está justificada.

## **DERECHOS HUMANOS**

En relación a los derechos humanos que toda autoridad debe observar; debe decirse, que hay derechos humanos inherentes directamente a la persona y otros a sus derechos procesales.

Evidentemente que son de mayor entidad los derechos humanos personales (como es la privación injustificada de la libertad personal (cuando no exista flagrancia, caso urgente u orden de aprehensión), la tortura, azotes, tormentos, etc., estipulados en el artículo 22 constitucional, no así los indirectos o que afectan un derecho procesal, como son los plazos procesales, la asistencia consular, la adecuada defensa, en fin, las violaciones a las formalidades del procedimiento a que se refiere el artículo 160 de la Ley de Amparo).

Lo anterior, trae consecuencias diferentes, los primeros, derechos humanos

**SIN TEXTO**



personales, trae como consecuencia una nulidad absoluta del acto de autoridad (amparo liso y llano), los segundos, una nulidad relativa (un amparo para efectos) de reponer el procedimiento, que muchas veces no es posible decretar, pues cesan en sus efectos irreparablemente en virtud de un cambio de situación jurídica, o etapa procesal, dentro del propio procedimiento penal (artículo 73, fracción X de la Ley de Amparo).

Por ejemplo, cuando no hay flagrancia y el juez la ratifica y dicta el auto de formal prisión, en el amparo se puede amparar lisa y llanamente porque la detención resultó ilegal; sin perjuicio que el Ministerio Público solicite nueva orden de aprehensión y subsanen esa violación; lo cual ya no se puede hacer en el amparo directo contra la sentencia definitiva, pues la privación de la libertad (prisión preventiva), ya obedece al auto de formal prisión, y no a la detención ilegal que ratificó el juez de la causa y que avaló en el auto de formal prisión inconstitucional y existe un cambio de situación jurídica.

Así lo ha resuelto la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contradicción de tesis, de tenor siguiente:

**Registro No. 181477**

**Localización:**

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Mayo de 2004

Tesis: 1a./J. 14/2004

Página: 441

Jurisprudencia

Materia (s): Penal

***"RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD....."***

#### **DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS**

Así, la víctima tiene un derecho humano directo, la cual consiste en que se le haga justicia ante el agravio perverso del particular, a sus derechos humanos (la vida, libertad, integridad física y psíquica, así como su patrimonio), por lo que cuando el imputado o sentenciado se le conoce el amparo liso y llano, por una violación formal, es inequitativo y se convierte en una violación mayor al derecho humano de la víctima, derecho, que consiste en que se castigue al culpable, es decir, a que se le administre justicia por tribunales competentes, en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronto, completa e imparcial, conforme al artículo 17

**SIN TEXTO**



constitucional.

**La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)**, en su artículo 7o., señala que el derecho a la libertad y seguridad personal, es un derecho humano. Sin embargo, estos derechos no sólo deben respetarse por la autoridad, sino también por los particulares, quienes de no hacerlo así, incurren en una conducta delictiva y el Estado tiene la obligación de prevenir e investigar, reparar las violaciones, castigar a quien o quienes violen ese derecho humano, que tratándose de un secuestro, se traduce en el mundo fáctico consiste en la libertad personal, y la integridad física y psíquica de la víctima y un patrimonio.

Conforme al segundo párrafo, del artículo 1 constitucional y 7 de la convención citada que dice:

**2. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal**

1. *Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.*
2. *Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Libres o por las leyes dictadas conforme a ellas. (...)*

Por otra parte, las víctimas u ofendidos tiene derechos subjetivos públicos establecidos en el artículo 20, inciso c), de la Constitución General de la República y, consecuentemente, en un juicio de amparo promovido por el activo del delito, tienen el derecho de tener el carácter de terceros perjudicados en el amparo directo e indirecto o en el recurso de revisión relativo, que se fallará ya con las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, y conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo vigente, así como los artículos 1, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos, reconocen el derecho de las víctimas a ser oídos y a que se les reconozcan sus derechos reconocidos por la normativa interna y en los tratados internacionales.

En consecuencia, los tribunales de la Federación tienen el deber de resolver los juicios de amparo, salvaguardando no solo los derechos humanos del delincuente, sino también de las víctimas u ofendidos, y en el caso concreto, deben tener el carácter de terceros perjudicados por tener interés jurídico en todo el procedimiento penal y el derecho a que el Estado les imparta justicia, gratuita, pronta y expedita.

Además, la violación de los derechos humanos de las víctimas genera un deber de reparación adecuada a favor de ellas o de sus familiares, a cargo de los poderes públicos competentes. Así lo ha dispuesto la Suprema Corte en el dictámen que

**SIN TEXTO**



•

•

•

•



valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente /2006, integrado con motivo de la solicitud de investigación de violaciones graves de garantías individuales, el doce de febrero de 2009 (tesis aislada Registro 163164). Asimismo, las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia y trato justo por parte de los Tribunales de la Federación como lo ha establecido la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del Abuso del Poder, en su resolución /2004, de 29 de noviembre de 1985.

### **DERECHO DE LA EQUITAD DE GÉNERO**

Por último, la sentenciada debe ser tratada con equidad de género, puesto que la justiciable es mujer, sin embargo, en el caso concreto, hay una víctima que también es del mismo género, la señora [redacted] madre del otro secuestrado, el menor [redacted], por lo que todo tribunal debe atender también a los derechos humanos de las víctimas, y con mayor razón cuando son mujeres o menores de edad, por ser también de igual o mayor entidad que la de los imputados.

### **ATRACCIÓN DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

En todo caso, de declarar procedente el recurso, ante lo complejo del asunto, por su importancia política y social, y la trascendencia del caso, es pertinente que lo resuelva el Pleno de la Suprema Corte, en uso de su facultad de atracción, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la decisión sería más confiable para la sociedad si la resolvieran once Ministros y no cinco, número que complica la justa votación. Pero además porque si se considera que la procedencia del recurso es con motivo de la reforma sobre derechos humanos de junio de 2011, pues con mayor razón debe conocer del recurso el Pleno y no la Sala, pues se trata de interpretación de normas constitucionales y de tratados internacionales donde aún no hay criterios jurisprudenciales sentados.

### **XVII. ANALISIS DEL GRADO DE AFECTACION O NO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE [redacted] SEGÚN LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. RESPETO AL DEBIDO PROCESO**

“Artículo 5º. Derecho a la Integridad Personal

**SIN  
TEXTO**



1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

A la sentenciada desde que fue detenida se le respeto su integridad física y psíquica, entendido esto, en razón de que cuando fue detenida por los elementos de seguridad, en ningún momento le causaron alguna lesión física o moral que afectara su integridad ya que incluso en lo que se ha llamado como "recreación" del momento de la detención, no se observa que recibiera malos tratos o expusiera la detenida haber sido objeto de alguna lesión o tortura.

Sin que ello obste, el hecho que en declaración ministerial y preparatoria la sentenciada refiriera que al momento de ser detenida, los policías captores la golpearon en la cabeza, le jalaban los cabellos y le acariciaron su cuerpo, toda vez que no aportó medio de prueba que lo hiciera evidente, ya que contrario a lo anterior obra en contraposición el dictamen de estado físico de la sentenciada que le fuera practicado inmediatamente (10:20) de que fuera puesta a disposición del autoridad ministerial (10:16) en el cual se certifica que la antes señalada no presentó huellas de lesiones traumáticas externas recientes y sin que a interrogatorio con el galeno manifestara alguna molestia o lesión causada en su detención.

Ahora bien, si bien es cierto que cabría la posibilidad de haber violado sus derechos relativos a su integridad moral, al haber sido exhibida ante los medios de comunicación y de esta forma a la sociedad, señalándola como participante de un secuestro sin que hasta ese momento se le acreditara su responsabilidad en el mismo, ello no le puede restar valor al cúmulo probatorio que sirvió para fincarle responsabilidad en definitiva, toda vez que, lo que generaría, sería una responsabilidad para los servidores públicos que lo efectuaron, sin que ello torne ilícito la detención de la sentenciada y todas las pruebas que de ella se obtuvieron.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

desde el momento de ser detenida (9/12/05) y hasta la conclusión de juicio no alegó a su favor que sufriera tortura, pena, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Tampoco le resta valor a los medios de convicción que sirvieron para incriminarla, el hecho de que alegara a su favor que fue golpeado al interior del " " el día que fueron detenidos, sin embargo su codetenido nada refirió al médico que lo dictaminó respecto de las lesiones que presentó y que

**SIN TEXTO**



tardaban en sanar menos de quince días, y ante la autoridad ministerial manifestó expresamente no ser su deseo querellarse por la lesiones que presentaba en ese momento.

No obstante lo anterior, circunstancialmente debe tomarse en consideración que al rendir su deposado ministerial (9/12/05) acepta su participación en diversos secuestros y que efectivamente el " " se utilizaba como domicilio para tener privadas de la libertad a sus víctimas.

Que y , víctimas de secuestro manifestaron que fueron rescatados de su cautiverio, el día nueve de diciembre de dos mil cinco, del " " domicilio rentado por

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

desde el momento de ser detenida se le respeto de manera digna inherente a su condición de ser huma  
 Artículo 7º  
 Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Al momento en que fue detenida y puesta a disposición, la autoridad ministerial le hizo saber las garantías contempladas en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus fracciones I, II, V, VII y IX y 128 del Código Federal de Procedimientos Penales en sus fracciones II, III y IV, así como los hechos que se le imputaban, los derechos que le asistían y el motivo por el cual se encontraba privada de su libertad.

Por lo que desde ese momento, tuvo conocimiento que los diversos delitos (Delincuencia Organizada y Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro) que se le imputaban, los cuales están considerados por la Ley como graves, (artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales), por ende, **no tenía derecho a gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución.**

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente en la época de los hechos, (09/12/05) en su fracción primera, establecía que el

**SIN TEXTO**



inculpado que en todo proceso del orden penal, puede solicitar de manera inmediata se le otorgue su libertad provisional bajo caución siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder ese beneficio; dispositivo Constitucional que guarda relación con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, igualmente vigente en la época de los hechos, deponía entre otras cosas, que el delito de Delincuencia Organizada y el de Privación Ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro son considerados como graves, luego entonces la sentenciada no podía haber obtenido su libertad provisional al disponerlo así las leyes legalmente expedidas con anterioridad al hecho, al encontrarse vigentes y regir el hecho realizado bajo esa vigencia.

### 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

Se reitera en el caso de la sentenciada , su detención no fue arbitraria ya que al momento de ser detenida se le encontró en flagrante delito en posesión de artefactos bélicos y en forma inmediata al conocerse por parte de los elementos captores de su participación en la privación ilegal de la libertad de diversas personas, fue puesta a disposición de la autoridad ministerial. Así, al ser detenida tuvo que ser sometida a prisión preventiva, una vez que la autoridad ministerial la pusiera a disposición del Juzgado de conocimiento, quien al momento de resolver su situación jurídica determinó que había elementos suficientes para sujetarla a proceso penal, lo cual en nuestro sistema penal tiene como consecuencia el encarcelamiento, por así preverlo el artículo 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes en la época de los hechos que en esencia señalan que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva por orden de un Juez, el cual en forma oficiosa lo realiza en los casos de delincuencia organizada.

### 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

Una vez que la sentenciada se puso a disposición de la autoridad ministerial se le hizo de su conocimiento las razones y delitos por las que fue detenida previo a tomarle su declaración ministerial de nueve de diciembre de dos mil nueve, lo cual consta en constancia recabada ante el agente del Ministerio Público de la Federación quien actuó con testigos de asistencia, el defensor público Federal que asistió a la sentenciada y el perito traductor que se le proporcionó en el acto de la diligencia.

### 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales

SIN TEXTO





al momento de ser detenida (instantes después de las 5 30 am) en compañía de quien al ser trasladados ante la autoridad ministerial les refirió a sus captores que debían regresar al " " porque en ese lugar tenían privadas de su libertad a unas víctimas, porque de no ser así sus cómplices tenían instrucciones de privar de la vida a las víctimas, por lo que se solicitó más apoyo policial para trasladarse a ese lugar, (7 15 am) del cual permitió el acceso lográndose el rescate de y de ahí que posteriormente fueron trasladados a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (10 16 am) para que los detenidos y las víctimas rindieran su declaración sobre los hechos.

Ahora bien, es de destacarse que la inmediatez a que se refiere el artículo 20 Constitucional, para poner a disposición de la autoridad competente al indiciado, en ningún momento se violenta en contra de la sentenciada, ya que debe tomarse en consideración el tiempo de espera que realizaron los elementos de seguridad para recibir el apoyo y poderse trasladar al domicilio en que se encontraban las víctimas, el tiempo que llevó trasladarse de un punto geográfico a otro, el tiempo que se invirtió para inspeccionar el domicilio y el tiempo que se lleva para trasladar a las víctimas e indiciados ante la autoridad ministerial, por lo que no puede atenderse a un sentido estricto el termino inmediato, debido a las inclemencias y complicaciones que puede revestir poner ante una autoridad al responsable de un ilícito.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.

El tres de marzo de dos mil seis, el agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal contra la sentenciada, haciendo así del conocimiento al Juez de instrucción su probable participación en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, solicitando en su caso librara el mandamiento de captura lo que hizo así al siguiente día y cumplimentándose el mismo, el ocho de se mismo mes y año, día en que la autoridad judicial calificó de legal la detención de la sentenciada y la sometió proceso el once de esa misma anualidad, al decretarle auto de plazo constitucional por los mismos delitos consignados.

Luego entonces a si tuvo acceso ante el juzgado de conocimiento para que calificara en su caso si su detención era considerada ilegal y en su caso dejarla en libertad, lo que no aconteció al calificar de legal su detención y posteriormente sujetarla a proceso.

**SIN TEXTO**



No obstante lo anterior la sentenciada tuvo la posibilidad de recurrir la anterior determinación ante un Tribunal de Alzada o de Control Constitucional, derecho que nunca hizo valer.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Hasta antes de dictarse sentencia firme a ésta fue considerada inocente y tratada como tal, en todas las fases del proceso penal, revirtiendo la carga de la prueba al agente del Ministerio Público de la Federación, quien aportó y robusteció las pruebas que la inculcaron en definitiva, derecho que le permitió a ella, ofrecer las probanzas que desacreditaran su culpabilidad.

Sin embargo, con el cúmulo probatorio recabado en las etapas de investigación y durante el desarrollo del proceso, en el que se desahogaron las diversas pruebas ofrecidas por las partes, se estableció legalmente su culpabilidad, al ser considerada responsable de los hechos imputados, toda vez que el 25 de abril de 2008, el entonces Juez conocedor de la causa (Juez 5° de Distrito en el D.F.), le dictó sentencia condenatoria por la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro (en agravio de 4 víctimas), Portación y Posesión de Arma de Fuego, Posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imponiéndole la pena total de noventa y seis años de prisión y 1475 días multa.

El 02 de marzo de 2009, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de apelación interpuesto por \_\_\_\_\_ y su defensa particular, confirmó su responsabilidad penal respecto a los ilícitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro (en agravio de 3 víctimas) y Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, absolviéndola de los delitos restantes, imponiéndole así la pena total de setenta años de prisión y 6400 días multa. Resolución que fue combatida por la sentenciada en amparo directo /2010, ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, quien el 10 de febrero de 2011, resolvió negar el amparo a dicha quejosa.

#### RESPETO A LOS DERECHOS DE

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:



SIN FEAR

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

Desde el primer día en que \_\_\_\_\_ fue puesta a disposición de la autoridad ministerial (9/12/05), por ser considerada probable responsable de la comisión de los delitos que se le imputaron, y al rendir su declaración inicial, estuvo asistida por un Perito Profesional en materia de traducción del idioma \_\_\_\_\_, el cual fue designado por la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para estar presente y asistir a la sentenciada en dicha diligencia, por ser ésta de nacionalidad \_\_\_\_\_. Asimismo dentro de su declaración preparatoria y en el desahogo de las diversas diligencias llevadas a cabo ante el Órgano Jurisdiccional, fue asistida por un perito traductor en el idioma \_\_\_\_\_.

Y si bien es cierto que \_\_\_\_\_ dentro de su declaración ministerial (9/12/05), manifiesta que comprendía y hablaba el idioma español, también es que, eso no fue óbice para las diversas autoridades conocedoras de los hechos, que le asignaran al Perito Traductor, para que la asistiera en las diferentes actuaciones procesales y pudiera comunicarse correctamente tanto con su abogado, como con el juez, asumiendo plenamente su defensa tanto material como técnicamente, además que siempre se veló para que perdurara ese canal de comunicación.

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

A partir del inicio de la investigación penal, se le comunicó a \_\_\_\_\_ con precisión y detalle la acusación formulada en su contra, así como las razones que llevaron a la autoridad investigadora a considerarla probable responsable de los hechos que se le atribuían, así como los motivos que presumían su participación, los indicios y medios probatorios; sobre todo la determinación legal que se le dio a los hechos, por los cuales fue investigada.

En consecuencia al término de la etapa procesal y siendo desahogado el cúmulo probatorio existente en la causa, la multireferida sentenciada fue señalada penalmente responsable de la comisión de los ilícitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro y Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO  
PRIMA CORTE DE JUSTICIA DE LA  
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE  
PRIMERA SALA

SIN  
TEXTO

En efecto, al momento en que la defensa de [redacted] tomo protesta del cargo, tuvo el tiempo y los medios adecuados, para desvirtuar los hechos que le fueron imputados a su representada, tan es así que pudo acceder a documentos y pruebas para poder con ello garantizar una adecuada defensa, y poder contrarrestar los medios de convicción existentes por parte de la Representación Social de la Federación.

Ahora bien, durante el proceso y ya contando la sentenciada de mérito con Defensa Particular, misma que también tomo protesta del cargo como tal, fue informada con anticipación de las actuaciones judiciales, para poder participar en el desahogo de cada una de ellas, así como también, en su oportunidad tuvo acceso al expediente judicial, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del proceso, las pruebas que obraban dentro del mismo, y con ello contradecir los hechos que le fueron imputados a su representada.

Aun y cuando nuestra ley adjetiva federal en su artículo 147, es clara en señalar que la instrucción deberá terminar en el menor tiempo posible, cuando exista auto de formal prisión y el o los delitos tengan señalada una pena máxima que exceda de dos años de prisión, es de observarse que si el proceso duró más tiempo, fue porque la sentenciada [redacted], en su momento procesal oportuno renunció a los plazos establecidos en la ley de la materia, los cuales le permitieron desahogar las pruebas por ella ofrecidas.

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor

Al momento en que [redacted] compareció ante la autoridad ministerial, por la probable comisión de los delitos que le fueron imputados, fue enterada de sus derechos, así como de los hechos que se le imputaban y de las personas que depusieron en su contra, rindiendo el 09 de diciembre de 2005 su declaración ministerial, en la cual tomó la decisión de nombrar al Defensor Público Federal, para que la asistiera durante el desarrollo de dicha diligencia, pudiendo comunicarse con éste libre y privadamente, antes, durante y después de la citada diligencia.

Sin pasar por desapercibido que durante la instrucción la sentenciada nombro defensor particular para la asistiera en el desarrollo de las diversas diligencias llevadas a cabo ante el Órgano Jurisdiccional.

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se

**SIN TEXTO**





defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

Aun y cuando no nombrara defensor para que la asistiera cuando rindió sus declaraciones ante la autoridad ministerial y el Órgano Jurisdiccional, por el simple hecho de tener la calidad de imputada, tiene el derecho irrenunciable a que el Estado de manera oficiosa le nombrara Defensor para que la asista en las diligencias a desahogarse. Lo que en el presente caso a estudio no sucedió, toda vez que la sentenciada de mérito nombró Defensa Pública para su ministerial y la Particular para ser asistida durante la secuela procedimental.

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

Precisamente en la etapa de instrucción e inmediatamente después de haber resuelto la situación jurídica de la defensa particular de ésta, ofreció sus respectivas probanzas, la cuales fueron admitidas por el Órgano Jurisdiccional.

Admitidas que fueron las mismas, el Juez conocedor de la causa auxilió para lograr la comparecencia de los testigos de cargo y descargo, ofrecidos por las partes; seguido que fue lo anterior, y agotadas que fueron las medidas tendientes a localizar y procurar la comparecencia de los testigos, se procedió al desahogo de dichas probanzas, diligencias varias en las cuales, al momento de la participación de la defensa, ésta tuvo el derecho adecuado y eficaz para examinar a los testigos, sin que se deje atrás los demás elementos de prueba desahogados, mismos que en su conjunto, no lograron desvirtuar la acusación ministerial que sirvió de base para dictar sentencia condenatoria a

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

, estando a disposición de la autoridad ministerial antes de rendir su primigenia declaración, se le comunicó detalladamente el hecho objeto de imputación, las pruebas existentes y las disposiciones penales aplicables, por consiguiente fue exhortada para conducirse con verdad, sin embargo al momento en que el Órgano Investigador le hace del conocimiento los hechos que se le imputaban negó los mismos, además de argumentar no saber las actividades ilícitas desarrolladas por su entonces pareja sentimental (co-procesado).

SIN FECHA



De lo que se concluye que la sentenciada tuvo el poder de decisión sobre su propia declaración, en la cual estuvo asistida por un defensor que participo antes y durante dicha diligencia, teniendo con ello el derecho a la no autoincriminación, mismo que ocurrió ya que la sentenciada se negó a declarar los hechos, a declararse culpable o a confesar los mismos.

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

La sentencia condenatoria dictada el 25 de abril de 2008, por el entonces Juez conductor de la causa (Juez 5° de Distrito en el D.F.), en la que resolvió que es penalmente responsable de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro, Portación y Posesión de Arma de Fuego, Posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, fue recurrida por la referida sentenciada.

Por lo que atento a lo anterior el 02 de marzo de 2009, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de apelación confirmó su responsabilidad penal respecto a los ilícitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro (en agravio de 3 víctimas) y Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, absolviéndola de los delitos restantes, imponiéndole así la pena total de **setenta años de prisión y 6400 días multa**.

Resolución que a su vez fue combatida por la sentenciada en amparo directo /2010, ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, quien el 10 de febrero de 2011, resolvió negar el amparo a dicha quejosa.

De lo anterior se advierte que, durante todas las etapas del proceso y dentro del término de ley, la sentenciada tuvo derecho a recurrir las diversas resoluciones emitidas en su contra, permitiendo con ello que las mismas pudieran ser revisadas por un Juez o Tribunal distinto y uno más de Control Constitucional.

3. La confesión del inculpaado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza

durante toda la secuela procedimental negó los hechos que le fueran imputados por el Órgano Investigador, aún así siempre se ha manifestado inocente, desde su primigenia declaración hasta la ampliada ante el

SIN TEND



Órgano Jurisdiccional. Cabe señalar que en ningún momento realizó confesión alguna respecto a los ilícitos por los que fuera condenada.

Por lo que ante tal negativa, le revirtió la carga probatoria al agente del Ministerio Público de la Federación, quien acreditó su plena responsabilidad en los hechos que se le imputaron.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

Contrario a ello, por sentencia de 25 de abril de 2008, fue declarada penalmente responsable de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro, Portación y Posesión de Arma de Fuego, Posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, resolución que fue combatida y el 02 de marzo de 2009, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió confirmó su responsabilidad penal respecto a los ilícitos de Delincuencia Organizada, Privación Ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro y Portación de Arma de Fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, absolviéndola de los delitos restantes. Inconformándose con la anterior resolución interpuso amparo directo /2010, ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, mismo que el 10 de febrero de 2011, resolvió negar el amparo a dicha quejosa.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Todas las diligencias desahogadas durante el proceso penal que le fue instruido a , fueron llevadas a cabo de manera pública, es decir, sin que se restringiera el acceso al público, fomentando con ello la transparencia e imparcialidad del asunto en específico, además de las decisiones que se pudieran tomar en un momento dado, sin dejar a un lado la confianza de las partes procesales.

TABLA DE HECHOS INDUBITABLES EN EL CASO DE  
INDEPENDIENTES DE CUALQUIER VIOLACION PROCESAL A LOS DERECHOS  
FUNDAMENTALES DE LA MISMA PERSONA.

<i>Hecho</i>	<i>Temporalidad</i>	<i>Que Prueba</i>
Con la averiguación previa la averiguación previa número PGR/SIEDO.	ocurrido el día 19 de agosto de 2005 y hasta el 9 de diciembre	<i>Que existió el secuestro y que fue denunciado meses antes</i>

**SIN TEXTO**



<p>iniciada por el secuestro de</p> <p>, y el</p> <p>menor</p> <p>, exigían la</p> <p>cantidad de</p> <p>, las víctimas fue</p> <p>liberada el 9 de diciembre</p> <p>de 2005, después de</p> <p>permanecer 52 días en</p> <p>cautiverio, deteniendo a dos</p> <p>presuntos responsables.</p>		
<p>Con la averiguación previa</p> <p>la averiguación previa</p> <p>número</p> <p>PGR/SIEDO.</p> <p>Bis/2005 iniciada por el</p> <p>secuestro de</p> <p>, ocurrido el día 4</p> <p>de Octubre de 2005, exigían</p> <p>la cantidad inicial de</p> <p>y</p> <p>quedan en de</p> <p>Dólares, la víctima fue</p> <p>liberada el 9 de Diciembre</p> <p>de 2005, después de</p> <p>permanecer 67 días en</p> <p>cautiverio, detienen a dos</p> <p>presuntos responsables.</p>	<p>Desde el 4 de octubre</p> <p>de 2005 al 9 de</p> <p>diciembre de 2005</p>	<p>Que existió el</p> <p>secuestro en esta</p> <p>temporalidad</p>
<p>Que se dieron las</p> <p>negociaciones con la</p> <p>banda</p>	<p>Durante el transcurso</p> <p>del secuestro</p>	<p>Que el secuestro se</p> <p>cometió</p>
<p>Que el negociador era</p>	<p>Durante el transcurso</p> <p>del secuestro</p>	<p>La identificación de la</p> <p>voz y el peritaje de la</p> <p>voz confirman la</p> <p>participación de la</p> <p>banda de</p>
<p>El " "</p> <p>fue usado en esos</p> <p>secuestros.</p>	<p>Durante los meses</p> <p>del secuestro</p>	<p>Que ese lugar se</p> <p>verifico ese secuestro</p> <p>que fue identificado</p> <p>por las victimas.</p>
<p>El teléfono del</p> <p>estaba a nombre de</p>	<p>La línea telefónica</p> <p>correspondiente al</p>	<p>Que el lugar esta</p> <p>vinculado con</p>

**SIN TEXTO**





	numero . estuvo instalada en " en la temporalidad de cinco meses (julio - diciembre 2005)	Recibo de teléfono de  Ampliación de declaración de la procesada ante el órgano jurisdiccional
En los recibos de existen llamadas en varios meses a	Que durante ese tiempo hubo llamadas a	La presencia de en el tiempo de las llamadas
La pareja de desde 22 de octubre de 2004 hasta julio de 2005 era el líder de la Banda de secuestradores.	Nueve meses	Que vivía con un secuestrador Las declaraciones de la sentenciada.
Hay Fotos de y en el	Que se conocían y que compartían el lugar	La presencia de en el Lugar
Se compraba comida para el grupo de muchas personas por parte de	Durante meses del secuestro que duro su relación	Las declaraciones de la sentenciada
2.- Objetos asegurados a  en el lugar licencia para conducir no. a nombre de expedida por el distrito federal tarjeta a nombre de No: Una agenda con diversos números telefónicos.. Un teléfono celular marca de la compañía con numero , con numero de imei	Que al tiempo de los secuestros vivía ahí	La Presencia de
Tambien se encontraron Tarjeta bancaria no. a nombre de Tarjeta	Durante el tiempo del aseguramiento	Que había presencia de y que tenía diversas cuentas

**SIN TEXTO**



<p>bancaria</p> <p>no. a</p> <p>nombre de Una tarjeta</p> <p>"</p> <p>no. a</p> <p>nombre de</p>		
<p>Fichas de depósito una de ellas del banco con número de cuenta a</p> <p>no. de pesos;</p> <p>y otra ficha de depósito al banco al número de tarjeta a</p> <p>nombre de</p> <p>con un</p> <p>importe de pesos.</p> <p>Una chequera del banco</p> <p>número de cuenta a nombre de</p> <p>que con el número y quedan por firmar del</p>	<p><i>Durante el</i></p> <p><i>aseguramiento</i></p>	<p><i>Que había presencia de y que estaba en el lugar ✓</i></p>
<p><i>acepta en</i></p> <p><i>diversas declaraciones que vivía en el con su pareja</i></p> <p><i>pero niega que haya participado en los secuestros</i></p>	<p><i>Durante los nueve meses que duro su relación cabe citar que se desprende de las declaraciones que la relación no fue constante</i></p>	<p><i>Las declaraciones de la procesada</i></p>
<p><i>es una mujer según su perfil psicológico de que cuenta con una adaptabilidad social alta y una capacidad criminal media alta, de pronóstico extrainstitucional desfavorable</i></p>	<p><i>16 de marzo de 2006</i></p>	<p><i>Estudio de personalidad</i></p> <p><i>Que como no se trata de alguien a quien se pueda engañar fácilmente no podía no saber que ahí se cometieron esos delitos</i></p>

**SIN TEXTO**



Ademas en el expediente se cuenta con certificaciones de las negociaciones por secuestro anteriores a los hechos y las cintas y grabaciones de las mismas:

d) "...Ampliación de declaración del C. \_\_\_\_\_ de fecha uno de diciembre del año dos mil cinco, quién esta Representación Social de la Federación, manifestó lo siguiente: "...es con la finalidad de entregar un \_\_\_\_\_ de la marca \_\_\_\_\_ tipo \_\_\_\_\_ de duración, el cual contiene en una de sus caras \_\_\_\_\_ las cuales, se pueden leer las leyendas siguientes: ' \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_ ' en dicho audio casete, contiene las grabaciones que se generaron entre mi persona y el secuestrador que me llamaba para exigirme dinero a cambio de la libertad de mi hijo \_\_\_\_\_, y quien me dice que lo tiene secuestrado, y en ese audio casete se encuentra la voz del secuestrador y es todo lo que quiero decir en esta declaración respecto del secuestro de mi hijo..."


**Ampliación de declaración de** \_\_\_\_\_, emitida ante este órgano jurisdiccional el ocho de junio de dos mil seis, donde manifestó: "...Que diga el testigo cuánto tiempo duró esa conversación. **RESPUESTA.-** no recuerdo ni minutos ni segundos, pero existen grabaciones con la voz del hombre, esa grabación la grabe ya que puse el altavoz y oprimí el grabar y grabó..."

Por otro lado, si se aplica a los testigos del caso \_\_\_\_\_ el CRITERIO RECOMENDADO POR LOS JUECES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LOS INTEGRANTES DEL JURADO para la calificación de los testigos y sus declaraciones, se puede encontrar lo siguiente:

Tabla de Valoración de las declaraciones de los testigos según las Instrucciones al Jurado de Puerto Rico		
Al decidir sobre la credibilidad de un o una testigo, ustedes deben examinar todo el testimonio, y pueden considerar, entre otros, los factores siguientes: Es importante que también conozcan que el peso de la evidencia no depende del número de testigos que testifica sobre un mismo hecho. Un solo o una sola testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho.		
Criterio EUA	Declaración	Valor
1) la edad del o de la testigo;	_____ : años de edad	
2) la capacidad del o de la testigo;	_____ : Declaración Ministerial	Declaraciones _____ que

**SIN TEXTO**

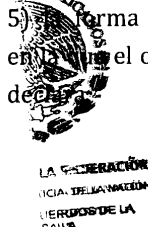


	<p>09/12/2005 Declaración                      Órgano Jurisdiccional 30/05/2006</p> <p>Al ser emitidas por personas con el criterio necesario para juzgar el acto, esto es, que sus manifestaciones alcanzaron el rango de prueba testimonial, toda vez que fueron rendidas por personas mayores de edad, con excepción del menor de edad</p> <p>, empero todos ellos, con independencia de su posición, los hechos que narraron los conocieron por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros,</p>	<p>fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o escuchar o conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración                      Órgano Jurisdiccional 30/05/2006</p> <p>Por el simple hecho de haber sido una de las víctimas de secuestro por parte de la acusada</p> <p>, pudo percatarse de circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que vivió durante su cautiverio, circunstancias que hizo del conocimiento a la autoridad ministerial, ratificando su dicho ante el Órgano Jurisdiccional, además de haber narrado los hechos vividos, momentos después de haber sido liberado, por lo tanto muestra credibilidad al rendir sus testimonios.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>

**SIN TEXTO**





4) la calidad de memoria que tiene el o la testigo;	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005</p> <p>Declaración Órgano Jurisdiccional 30/05/2006</p> <p>Fue transparente, ya que rindió declaración momentos después de haber sido liberado, tras haber estado en cautiverio durante varios días, realizando imputaciones directas en contra de sus secuestradores.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
 <p>5) forma y manera en que el o la testigo declaró</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005</p> <p>Declaración Órgano Jurisdiccional 30/05/2006</p> <p>Además de haber sido claros y precisos en sus declaraciones, donde por cierto no se aprecian reticencias algunas, amén de no existir en autos, que para conducirse de la manera en que lo hicieron, existiera algún tipo de presión en su contra.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
6) si el o la testigo tiene algún interés en el resultado del caso, o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio;	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005</p> <p>Declaración Órgano Jurisdiccional 30/05/2006</p> <p>No manifestó ni ante la autoridad ministerial, ni ante el Órgano Jurisdiccional algún interés o parcialidad en el asunto.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
7) Si hay alguna		

**SIN TEXTO**



<p>evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo, ya sea porque antes del juicio éste o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 30/05/2006 Rindió su declaración ante la autoridad ministerial misma que fue ratificada ante el Órgano Jurisdiccional, precisando a detalle los vivido durante su cautiverio, y si bien existieron circunstancias que omitió hacerlas del conocimiento en su prístina declaración, ello no puede tomarse como evidencias que generen dudas o contradigan sus testimonios rendidos con anterioridad.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>8) cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen.</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 30/05/2006 Siendo víctima del delito de secuestro sus testimonios rendidos ante las diversas autoridades y concatenados con los demás medios de prueba existentes en la causa, dentro de los que destacan las declaraciones de los otras dos víctimas ( ) resultan sensatos y prudentes para acreditar la respobsablidad de los acusados.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>9) la renuencia del o de la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos;</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 30/05/2006 No existió resistencia de su parte al rendir sus testimonios, toda</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>

**SIN TEXTO**



Criterio EUA	Declaración	Valor
1) la edad del o de la testigo;	años de edad	
2) la capacidad del o de la testigo;	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>Al ser emitidas por personas con el criterio necesario para juzgar el acto, esto es, que sus manifestaciones alcanzaron el rango de prueba testimonial, toda vez que fueron rendidas por personas mayores de edad, con excepción del menor de edad</p> <p>empero todos ellos, con independencia de su</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>

**SIN TEXTO**




	posición, los hechos que narraron los conocieron por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros,	
3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o escuchar o conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>Por el simple hecho de haber sido una de las víctimas de secuestro por parte de la acusada</p> <p>, pudo percatarse de circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que vivió durante su cautiverio, circunstancias que hizo del conocimiento a la autoridad ministerial, ratificando su dicho ante el Órgano Jurisdiccional, además de haber narrado los hechos vividos, momentos después de haber sido liberado, por lo tanto muestra credibilidad al rendir sus testimonios.</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
4) la calidad de memoria que tiene el o la testigo;	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>Se torno clara, toda vez que relato hechos inéditos vividos durante su cautiverio, a pesar de las inconsistencias que pudieran generar alguna duda, sus declaraciones realizadas con</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.



**SIN TEXTO**





	posterioridad a la primera.	
<p>5) la forma y manera en la que el o la testigo declara;</p> 	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>Además de haber sido claros y precisos en sus declaraciones, donde por cierto no se aprecian reticencias algunas, amén de no existir en autos, que para conducirse de la manera en que lo hicieron, existiera algún tipo de presión en su contra.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>6) si el o la testigo tiene algún interés en el resultado del caso, o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio;</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>No declaró nada respecto al interés con el que se revuelva el asunto.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>7) Si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo, ya sea porque antes del juicio éste o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>Rindió su declaración ante la autoridad ministerial misma que fue ratificada ante el Órgano Jurisdiccional, precisando a detalle los vividos durante su cautiverio, y si bien existieron</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>

**SIN TEXTO**



	circunstancias que omitió hacerlas del conocimiento en su prístina declaración, ello no puede tomarse como evidencias que generen dudas o contradigan sus testimonios rendidos con anterioridad.	
8) cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen.	Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Siendo víctima del delito de secuestro sus testimonios rendidos ante las diversas autoridades y concatenados con los demás medios de prueba existentes en la causa, dentro de los que destacan las declaraciones de los otras dos víctimas (            y            ) resultan sensatos y prudentes para acreditar la responsabilidad de los acusados.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
9) la renuencia del o de la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos;	: Declaración Ministerial 09/12/2005 14/02/2006 Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Declaro sin ninguna renuencia a pesar de su corta edad, además de existir en él la plena confianza al haber estado en todo momento asistido por su padre el señor	Declaraciones fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
10) la naturaleza del testimonio.	Declaración Ministerial 09/12/2005	Declaraciones que fueron valoradas en




SIN TEXTO

14/02/2006 Declaración Jurisdiccional 07/06/2006 Por las circunstancias esenciales de los hechos, el citado menor tuvo que rendir su declaración ministerial, misma que fue ratificada ante el Órgano Jurisdiccional.	Órgano	términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
---	--------	---

Criterio EUA	Declaración	Valor
1) la edad del o de la testigo;	años de edad	
2) la capacidad del o de la testigo;	Declaración Ministerial 09/12/2005, 08/02/2006 y 15/02/2006. Declaración Jurisdiccional 07/06/2006 Al ser emitidas por personas con el criterio necesario para juzgar el acto, esto es, que sus manifestaciones alcanzaron el rango de prueba testimonial, toda vez que fueron rendidas por personas mayores de edad, con excepción del menor de edad  empero todos ellos, con independencia de su posición, los hechos que narraron los conocieron por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros,	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o	Declaración Ministerial 09/12/2005, 08/02/2006 y	Declaraciones que fueron valoradas en

**SIN TEXTO**

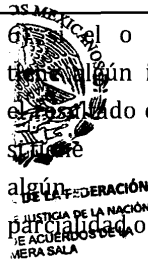


<p>escuchar o conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;</p> 	<p>15/02/2006. Declaración                      Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Por el simple hecho de haber sido una de las víctimas de secuestro por parte de la acusada  pudo percatarse de circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que vivió durante su cautiverio, circunstancias que hizo del conocimiento a la autoridad ministerial, ratificando su dicho ante el Órgano Jurisdiccional, además de haber narrado los hechos vividos, momentos después de haber sido liberado, por lo tanto muestra credibilidad al rendir sus testimonios.</p>	<p>términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>4) la calidad de memoria que tiene el o la testigo;</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005, 08/02/2006 y 15/02/2006. Declaración                      Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Fue transparente, ya que rindió declaración momentos después de haber sido liberado, lo cual permite inferir que fueron hechos recientes lo que hizo del conocimiento a la autoridad ministerial, a pesar de las inconsistencias que pudieran generar alguna duda, sus declaraciones realizadas con posterioridad a la primera.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>5) la forma y manera en la que el o la testigo declara;</p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005, 08/02/2006 y</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en</p>

**SIN  
TEXTO**





	<p>15/02/2006.</p> <p>Declaración                      Órgano Jurisdiccional</p> <p>07/06/2006</p> <p>Además de haber sido claros y precisos en sus declaraciones, donde por cierto no se aprecian reticencias algunas, amén de no existir en autos, que para conducirse de la manera en que lo hicieron, existiera algún tipo de presión en su contra.</p>	<p>términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>6) Si el o la testigo tiene algún interés en el asunto del caso, o algún motivo, parcialidad o prejuicio;</p> 	<p>Declaración Ministerial</p> <p>09/12/2005, 08/02/2006 y 15/02/2006.</p> <p>Declaración                      Órgano Jurisdiccional</p> <p>07/06/2006</p> <p>No mostró algún interés o parcialidad en el asunto, pese a que fue víctima de los maltratos físicos y psicológicos vividos durante su cautiverio.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>7) Si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo, ya sea porque antes del juicio éste o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;</p>	<p>Declaración Ministerial</p> <p>09/12/2005, 08/02/2006 y 15/02/2006.</p> <p>Declaración                      Órgano Jurisdiccional</p> <p>07/06/2006</p> <p>Rindió su declaración ante la autoridad ministerial misma que fue ratificada ante el Órgano Jurisdiccional, precisando a detalle los vividos durante su cautiverio, y si bien existieron circunstancias que omitió hacerlas del conocimiento en su prístina declaración, ello no puede tomarse como evidencias que generen confusión o contradigan sus testimonios</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>

**SIN TEXTO**



•

•

•

•

	rendidos con anterioridad.	
8) cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen.	Declaración Ministerial 09/12/2005, 08/02/2006 y 15/02/2006. Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Siendo víctima del delito de secuestro sus testimonios rendidos ante las diversas autoridades y concatenados con los demás medios de prueba existentes en la causa, dentro de los que destacan las declaraciones de los otras dos víctimas (            y            ) resultan sensatos y prudentes para acreditar la respobsablidad de los acusados.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
9) la renuencia del o de la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos;	Declaración Ministerial 09/12/2005, 08/02/2006 y 15/02/2006. Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Rindió declaración libremente, sin ningún tipo de mesura ni recato en las manifestaciones realizadas ante el Ministerio Público de la Federación Investigador de los hechos y ratificadas ante el Órgano Jurisdiccional, pese a que siendo víctima del delito, sufrió y resistió situaciones incómodas durante su cautiverio.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
10) la naturaleza del testimonio.	Declaración Ministerial 09/12/2005, 08/02/2006 y	Declaraciones que fueron valoradas en

**SIN  
TEXTO**



	15/02/2006. Declaración Jurisdiccional 07/06/2006 Por lo peculiar del caso a estudio, rindió declaración al ser una de las víctimas de secuestro por parte de los acusados.	Órgano términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
--	---	---

Criterio EJA	Declaración	Valor
1) la edad del o de la testigo;	años de edad	
2) la capacidad del o de la testigo;	Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005. Declaración Jurisdiccional 07/06/2006 Al ser emitidas por personas con el criterio necesario para juzgar el acto, esto es, que sus manifestaciones alcanzaron el rango de prueba testimonial, toda vez que fueron rendidas por personas mayores de edad, con excepción del menor de edad  empero todos ellos, con independencia de su posición, los hechos que narraron los conocieron por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros,	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o escuchar o	Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005. Declaración Órgano	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo

**SIN TEXTO**



•

•

•

•

conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;	<p>Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>Por la experiencia vivida con sus familiares, hizo del conocimiento hechos que le constan por haberlos vivido, siendo la persona que realizo las negociaciones para la liberación de sus familiares, además que éstos en su oportunidad le dieron a conocer a detalle los momentos que pasaron durante su cautiverio</p>	289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
<p>4) la calidad de memoria que tiene el o la testigo.</p> <p><i>DECLARACIÓN MINISTERIAL JURISDICCIONAL 07/06/2006</i></p>	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005.</p> <p>Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>La calidad de su memoria denota consciencia, al relatar hechos propios sobre las negociaciones realizadas para lograr la liberación de sus familiares</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
5) la forma y manera en la que el o la testigo declara;	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005.</p> <p>Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006</p> <p>Además de haber sido claros y precisos en sus declaraciones, donde por cierto no se aprecian reticencias algunas, amén de no existir en autos, que para conducirse de la manera en que lo hicieron, existiera algún tipo de presión en su contra.</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
6) si el o la testigo tiene algún interés en el resultado del caso, o si tiene	<p>Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005.</p> <p>Declaración Órgano</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo

**SIN TEXTO**






algún motivo, parcialidad o prejuicio;	Jurisdiccional 07/06/2006 Siendo ofendido en el asunto, por las negociaciones realizadas con los secuestradores, aún más haber pasado situaciones desagradables entorno al secuestro de sus familiares, no tuvo interés, parcialidad o algún motivo en contra de los secuestradores.	289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
7) Si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo, ya sea porque antes del juicio este o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;	Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005. Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 No existieron inconsistencias en sus declaraciones.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
8) cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen.	Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005. Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Resulta apto su testimonio toda vez que fue la persona encargada de realizar las negociaciones para la liberación de sus familiares, conociendo los hechos que éstos vivieron durante el tiempo que los mantuvieron privados de su libertad.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
9) la renuencia del o de la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos;	Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005. Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos

SIN TEXTO



	Conociendo los hechos de los que fueran víctimas sus familiares, no optó en ningún momento reservarse y no hacer del conocimiento a la autoridad las vejaciones que sufrieron aquellos durante su cautiverio.	Penales.
10) la naturaleza del testimonio.	 <p>Declaración Ministerial 09/12/2005 y 13/12/2005. Declaración Órgano Jurisdiccional 07/06/2006 Lo principal de su declaración se refleja en las negociaciones realizadas con los secuestradores para lograr el pago del rescate y que éstos liberaran a sus familiares.</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Criterio EUA	Declaración	Valor
1) la edad del o de la testigo;		
2) la capacidad del o de la testigo;	<p>Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 01/12/2005 Al ser emitidas por personas con el criterio necesario para juzgar el acto, esto es, que sus manifestaciones alcanzaron el rango de prueba testimonial, toda vez que fueron rendidas por personas mayores de edad, con excepción del menor de edad empero todos</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.


**SIN TEXTO**



	ellos, con independencia de su posición, los hechos que narraron los conocieron por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros,	
3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o escuchar o conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;	Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 01/12/2005 Por la experiencia vivida con su familiar, hizo del conocimiento hechos que le constan por haberlos vivido, siendo la persona que realizó las negociaciones para la liberación de su hijo además que éste en su oportunidad le dió a conocer a detalle los momentos que paso durante su cautiverio	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
4) la calidad de memoria que tiene el o la testigo;	Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 01/12/2005 La calidad de su memoria denota consciencia, al relatar hechos propios sobre las negociaciones realizadas para lograr la liberación de sus familiares	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
5) la forma y manera en la que el o la testigo declara;	Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 01/12/2005 Además los hechos de que se trata son susceptibles de	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.

**SIN TEXTO**



	<p>conocerse por medio de los sentidos, los testigos los conocieron por sí mismos y no por inducciones o referencias de otros, aunado a que sus deposados fueron claros y precisos, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales, amén de que no fueron obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, al no haber prueba en este sentido.</p>	
<p>6) Si el o la testigo tiene algún interés en el resultado del caso, o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio;</p>	<p>Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 01/12/2005 Siendo ofendido en el asunto, por las negociaciones realizadas con los secuestradores, aún más haber pasado situaciones desagradables entorno al secuestro de sus familiares, no tuvo interés, parcialidad o algún motivo en contra de los secuestradores.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>7) Si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo, ya sea porque antes del juicio éste o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;</p>	<p>Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 01/12/2005 No existieron inconsistencias en sus declaraciones.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>8) cuán razonable es el testimonio del o de la</p>	<p>Declaración Ministerial</p>	<p>Declaraciones que</p>

**SIN TEXTO**





testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen.	25/11/2005 Declaración Jurisdiccional 01/12/2005 Resulta apto su testimonio toda vez que fue la persona encargada de realizar las negociaciones para la liberación de sus familiares, conociendo los hechos que éstos vivieron durante el tiempo que los mantuvieron privados de su libertad.	fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
9) la renuencia del o de la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos. <small>SECRETARÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA JERÓNIMO GARCÍA SALA</small>	Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Jurisdiccional 01/12/2005 Conociendo los hechos de los que fuera víctima su familiar, no optó en ningún momento reservarse y no hacer del conocimiento a la autoridad las vejaciones que sufrió aquél durante su cautiverio.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
10) la naturaleza del testimonio.	Declaración Ministerial 25/11/2005 Declaración Jurisdiccional 01/12/2005 Lo principal de su declaración se refleja en las negociaciones realizadas con los secuestradores para lograr el pago del rescate y que éstos liberaran a su familiar.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Criterio EUA	Declaración	Valor
--------------	-------------	-------

**SIN TEXTO**



1) la edad del o de la testigo;	<u>Elementos captores</u>	
2) la capacidad del o de la testigo;	<p><u>Captore:</u></p> <p>Declaración Ministerial 09/12/2005</p> <p>Declaración Jurisdiccional 19/09/2006</p> <p>Órgano</p> <p>El interés que movió a los emitentes para hacerlo, no es personal, sino en razón del cumplimiento de la comisiones que como elementos policiacos les son encomendadas, al ser emitidas por personas con el criterio necesario para juzgar el acto.</p>	<p>Por lo que respecta a los elementos captores, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o escuchar o conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;	<p><u>Captore</u></p> <p>Declaración Ministerial 09/12/2005</p> <p>Declaración Jurisdiccional 19/09/2006</p> <p>Órgano</p> <p>Declararon ante la autoridad ministerial, con base a las investigaciones realizadas y cumpliendo la orden de localización y presentación de los acusados de quienes se tenía conocimiento que se encontraban relacionados con diversos secuestros.</p>	<p>Por lo que respecta a los elementos captores, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
4) la calidad de memoria que tiene el o la testigo;	<p><u>Captore</u></p> <p>Declaración Ministerial 09/12/2005</p> <p>Las declaraciones de los elementos captores fueron con posterioridades a la detención de los acusados, por lo tanto los</p>	<p>Por lo que respecta a los elementos captores, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de</p>


**SIN TEXTO**



	hechos narrados no sufrieron variaciones.	Procedimientos Penales.
5) la forma y manera en la que el o la testigo declara;	<p><u>Captore:</u> Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración                      Órgano Jurisdiccional 19/09/2006 Los hechos sobre los que depusieron los conocieron por medio de los sentidos, por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otro, sus declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni reticencias, versó sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias esenciales, sin que hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno.</p>	Por lo que respecta a los elementos captores, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.
6) si el o la testigo tiene algún interés en el resultado del caso, o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio;	<p><u>Captore:</u> Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración                      Órgano Jurisdiccional 19/09/2006 Al ser emitidas por personas con el criterio necesario para juzgar el acto, por su probidad e independencia de su posición son imparciales, dándose la detención de los acusados con base a la orden de localización y presentación de los mismos.</p>	Por lo que respecta a los elementos captores, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.
7) Si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo,	<p><u>Captore:</u> Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración                      Órgano Jurisdiccional</p>	Por lo que respecta a los elementos captores, sus testimonios fueron valorados en términos

**SIN TEXTO**



ya sea porque antes del juicio éste o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;	19/09/2006 Al ser sus testimonios narrados con posterioridad a los hechos que les constan, lo que se concluye que no hubo contradicciones en sus respectivos depósitos.	del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.
8) cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen. 	<u>Captore:</u> Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 19/09/2006 Las declaraciones y las ratificaciones de las mismas ante el órgano jurisdiccional se muestran moderadas.	Por lo que respecta a los elementos captore, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.
9) la renuencia del o de la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos;	<u>Captore:</u> Declaración Ministerial 09/12/2005 Declaración Órgano Jurisdiccional 19/09/2006 No existieron en ningún momento circunstancias ajenas por las que no pudieran declarar en relación a los hechos.	Por lo que respecta a los elementos captore, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.
10) la naturaleza del testimonio.	<u>Captore:</u> Declaración Ministerial 09/12/2005 La orden de localización y presentación de los acusados, por la comisión de diversos delitos.	Por lo que respecta a los elementos captore, sus testimonios fueron valorados en términos del artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.

SIN TEXTO





Criterio EUA	Declaración	Valor
1) la edad del o de la testigo;	( ): años de edad	
2) la capacidad del o de la testigo;	( ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006 Al estar rendidas por personas que por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el acto, que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o escuchar o conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;	( ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006 Declaró ante la autoridad ministerial, puntualizando los hechos que le constan.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
4) la calidad de memoria que tiene el o la testigo;	( ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006 Aunque únicamente comparece ante al autoridad ministerial, la calidad de su memoria se torna lúcida, al relatar los hechos que le constan.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
5) la forma y manera en la que el o la testigo declara;	( ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal

**SIN TEXTO**



	Además los hechos de que se trata son susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, los testigos los conocieron por sí mismos y no por inducciones o referencias de otros, aunado a que sus deposados fueron claros y precisos, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales, amén de que no fueron obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, al no haber prueba en este sentido.	de Procedimientos Penales.
6) Si el o la testigo tiene algún interés en el caso, o algún motivo, parcialidad o prejuicio;	( ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006 Se presume tienen completa imparcialidad (pues no hay prueba en contrario).	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
7) Si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo, ya sea porque antes del juicio éste o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;	( ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006 No existieron inconsistencias en sus declaraciones, sin dejar pasar por alto mencionar que únicamente compareció una sola vez ante la autoridad ministerial.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
8) cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen.	( ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal

**SIN TEXTO**



	El testimonio es tomado en consideración al manifestar que reconoció a _____ como la persona que acudía a su puesto siempre que iba la ofendida	de Procedimientos Penales.
9) la renuencia del o de la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos;	( _____ ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006 No hubo reserva o resistencia al rendir sus declaraciones, máxime que su participación únicamente	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
10) la naturaleza del testimonio.	( _____ ): Declaración Ministerial 10/02/2006 01/03/2006 Al existir el reconocimiento de su parte hacia la acusada _____ como la misma que acudía a su puesto a comprar verdura, la cual siempre lo hacía cuando llegaba la señora	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Criterio EUA	Declaración	Valor
1) la edad del o de la testigo;	: (dueña del _____):	
2) la capacidad del o de la testigo;	_____ (dueña _____)	Declaraciones que fueron valoradas en

**SIN  
TEXTO**



	Declaración Ministerial 10/12/2005. Tuvo la cordura necesaria para declarar en relación a los hechos que conoció.	términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
3) la oportunidad y habilidad que tuvo el o la testigo para ver o escuchar o conocer los asuntos sobre los cuáles está testificando;	<u>(dueña)</u>  Declaración Ministerial 10/12/2005. Declaró ante la autoridad ministerial, únicamente hechos que le constan respecto a la propiedad del inmueble conocido como " ", en el cual tenían secuestradas a las tres víctimas que fueron liberadas.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
4) <del>razón</del> calidad de memoria que tiene el o la testigo;	<u>(dueña)</u>  Declaración Ministerial 10/12/2005. Fue clara, siendo que compareció por voluntad propia ante las autoridades a rendir su testimonio.	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
5) la forma y manera en la que el o la testigo declara;	<u>(dueña)</u>  Declaración Ministerial 10/12/2005. Los hechos de que se trata son susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, los testigos los conocieron por sí mismos y no por inducciones o referencias de otros, aunado a que sus depósitos fueron claros y precisos, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales, amén de que no fueron obligados a declarar por	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.

**SIN TEXTO**






	fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, al no haber prueba en este sentido.	
6) si el o la testigo tiene algún interés en el resultado del caso, o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio;	<p>(dueña)</p> <p>Declaración Ministerial 10/12/2005.</p> <p>Sin ningún interés en el asunto, únicamente acreditar la propiedad del inmueble conocido como con la finalidad de que le fuera entregado.</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
7) Si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del o de la testigo, ya sea porque antes del juramento éste o esta declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice;	<p>(dueña)</p> <p>Declaración Ministerial 10/12/2005.</p> <p>No existieron inconsistencias en sus declaraciones, conociendo únicamente detalles respecto a la propiedad del inmueble y al contrato de renta que celebro en su momento con el procesado</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
8) cuán razonable es el testimonio del o de la testigo al considerarse con otra evidencia que ustedes creen.	<p>(dueña)</p> <p>Declaración Ministerial 10/12/2005.</p> <p>Resulta razonable, toda vez que por un lado acredita la propiedad del inmueble en donde los acusados mantenían cautivas a las víctimas del secuestro, hasta ser liberadas tras el pago del rescate, y por otra parte la relación por el contrato realizado entre la testigo y el hoy procesado</p>	Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
9) la renuencia del o de		

STN TETIC



<p>la testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos;</p>	<p><u>(dueña</u> Declaración Ministerial 10/12/2005. No hubo resistencia a rendir su testimonio, máxime que su participación que la involucra en los hechos a estudio, fue ser la dueña del y haber rentado el mismo al hoy procesado sin conocer a detalle los hechos.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>
<p>10) la naturaleza del testimonio.</p> 	<p><u>(dueña</u> Declaración Ministerial 10/12/2005. Por ser la dueña del “ ”, compareció de manera voluntaria ante la autoridad ministerial a acreditar la propiedad del citado inmueble, además de declarar entre otras cosas hechos que le constan de manera directa.</p>	<p>Declaraciones que fueron valoradas en términos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.</p>

SIN TEXTO



**COMENTARIO:** ESTAS TABLAS REPRESENTAN UN SISTEMA DE VALORACION DE PRUEBA CON ESTANDAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA QUE ES EL QUE SE UTILIZA EN LOS JURADOS AMERICANOS. SE TRATA DE UN ESTANDAR QUE PUEDE SER RELACIONADO CON EL ESTADAR MEXICANO DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

EL MINISTRO ZALDIVAR EN SU PROYECTO, IGNORA Y DESCALIFICA TODAS LAS DECLARACIONES POR UN EFECTO SUPESTO EFECTO CORRUPTOR NO PROBADO, NI FISICA, NI ESTADISTICA NI FACTICAMENTE SOBRE LA MENTE DE LOS TESTIGOS, LOS MINISTERIOS PUBLICOS Y LOS JUZGADORES Y SU IMPACTO EN LA OPINION PUBLICA. QUE ADEMAS ES DE EFECTO PERMANENTE Y CATASTROFICO. ES DECIR DETRUCTOR DE TODA POSIBILIDAD DE JUSTICIA.

Conclusiones respecto de las pruebas.

a) De las pruebas que existen en el expediente de manera indubitable y directa se prueba sin lugar a dudas lo siguiente:

1. Que las personas fueron secuestradas durante un priodo determinado.
2. Que el teléfono que estaba en el                      estaba a nombre de                      y desde ahí hizo diversas llamadas telefónicas, incluso a
3. Que                      vivía en el                      "                      " desde nueve meses antes de su detención.
4. Que en ese                      donde vivía                      y su pareja se desarrollaron los siguientes secuestros, mismos que fueron liberados el día 9 de diciembre de 2005.
5. Que                      veía como se compraba la comida que se consumiría por los residentes de la casa mencionada y ésta comida era en cantidad muy superior a la que puedan consumir dos personas (                      y ella).

SIN TEXTO



Como consecuencia de lo anterior se puede demostrar indiciariamente, mediante indicios graves, unívocos y concordantes que permiten concluir de acuerdo a todas las teorías, a la racionalidad y a la experiencia que no podía dejar de conocer que ahí se celebraron los secuestros.

Todos estos argumentos que prueban de manera más allá de toda duda razonable, se entrelazan y complementan con argumentos a los que el proyecto del Magistrado Zaldívar les pretende quitar todo valor probatorio y que son las declaraciones de las víctimas que se encuentran en las páginas de su proyecto de sentencia, y que demuestran lo siguiente:

Por lo anterior:

1. Se encuentra mediante prueba directa, indirecta, y diversos testimonios únicos, claros y concordantes que participó en los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

2. Para llegar a la conclusión anterior no es necesario, de ninguna manera tomar en consideración ninguna prueba viciada. Ya que las declaraciones de los hechos probados son concluyente, las declaraciones de los testigos son posteriores a los hechos y fueron dadas de manera que se señalan en la tabla.

3. Todas las pruebas viciadas pueden ser eliminadas y aun así la convicción del juzgador sobre la participación de se sostiene.

Por lo anteriormente expuesto:

#### XIV. PUNTOS PETITORIOS

Solicitamos atentamente

**PRIMERO.** Que se nos reconozca la calidad de **víctimas** del delito y de organizaciones que representan los intereses de las víctimas del delito.

**SEGUNDO.** Que se analicen todos y cada uno de los argumentos que contiene el presente **Amicus Curiae** y que el recurso de revisión de la señora se resuelva de conformidad con el Artículo 107 de la Constitución atendiendo exclusivamente al análisis de la interpretación directa de la Constitución y de las Leyes, como es la facultad exclusiva de esa Corte, y que consideración exhaustiva de los mismos.

**SIN TEXTO**





**TERCERO.** Que se ponderen como lo exige la Constitución los derechos humanos tanto del imputado como de las víctimas, garantizando los derechos de todos de manera pro homine es decir como lo dice el Artículo Primera de la Constitución de manera interdependiente, indivisible y con progresividad.

**CUARTO.** Que en caso de que se considere la existencia de violación de los derechos fundamentales de se analice el daño causado sin que pueda implicar la desprotección de los derechos de las víctimas.

**QUINTO.** Que en todo caso si, esa Corte, llegará a considerar que existen pruebas viciadas que fueron valoradas por los jueces se ordene que esas pruebas, y nada más esas, salgan del caso y que se reponga el proceso ad inicio. Esa es la única manera de que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que se cumpla con el objeto del proceso penal que es conforme al Artículo 20 de la Constitución esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen

**ATENTAMENTE**

Protesto lo necesario

**México D.F., a 14 Marzo de 2012**

015639

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACION

2012 MAR 14 PM 3 24

2012 MAR 14 PM 3 24

PRIMERA SALA  
SECRETARIA DE ACUERDOS

OFICINA DE CERTIFICACION  
JUDICIAL Y CORRESPONDIENTES

Recibido de un enviado en  
(286) Fojas, sin anexas  
2011



**CANCELADO**  
**SIN TEXTO**